

***Los “verdurazos” y “feriazos” como hechos políticos y comunicacionales:
la puesta en agenda de la problemática de los pequeños productores del
Cinturón Hortícola Bonaerense nucleados en la Unión de Trabajadores de
la Tierra entre los años 2016 y 2018.***

Rodríguez, María Emilia

Julio de 2021

ÍNDICE

1. Introducción
 - 1.1 Del interés por la temática y su relación con el lugar desde el cual reflexionamos
2. Caracterización del Cinturón Hortícola Bonaerense (CHB) y de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)
- 3.-El contexto Histórico y la relación Estado-Organizaciones Sociales
- 4- Los “Verdurazos” y “feriazos” en el periodo 2016-2018
 - 4.1. Los antecedentes
 - 4.2 El primer “Verdurazo”
 - 4.3 Diciembre de 2016: el segundo “Verdurazo”
 - 4.4 Abril de 2017: el tercer verdurazo en el marco de una jornada nacional de lucha
 - 4.5 Octubre de 2017: El “Feriazo de las Economías Regionales”
 - 4.6 Diciembre de 2017: “Verdurazo por los Jubilados”
 - 4.7 Abril de 2018: “Verdurazo con acampe”
 - 4.8 Los “Feriazos”
5. Políticas Estatales para la Agricultura Familiar. Transformación y desfinanciamiento entre los años 2016 y 2018.
6. Reflexiones Finales

1. INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2016, en un contexto económico y social crítico, comienzan a sucederse en la Ciudad de Buenos Aires una serie de medidas de protestas llevadas adelante por organizaciones que nuclean y representan a pequeños productores de alimentos de la zona sur del Cinturón Hortícola Bonaerense. Denominadas “verdurazos” y “feriazos” –tanto por aquellas organizaciones como por los medios de comunicación y la sociedad en general– estas medidas tuvieron como escena común la confluencia en un mismo espacio de personas que iban en busca de un poco de verdura gratis y pequeños productores que a partir de esta particular forma de protesta, intentaban visibilizar la situación crítica que estaban atravesando por aquel entonces como consecuencia de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos y la falta de políticas estatales para el sector.

Los “verdurazos” y “feriazos” tuvieron un impacto considerable tanto a nivel mediático como en la calle. Por ello, cuando comienzan a sucederse llamó mi atención, en primer lugar, la particular medida de acción tomada por los sujetos organizados colectivamente para visibilizar sus problemáticas y demandas hacia la población en general y en particular al Estado; también, la gran resonancia que tuvieron en los medios de comunicación –televisivos, gráficos y radiales–, a diferencia tal vez de otras medidas tomadas previamente. En este sentido, ¿por qué los “verdurazos” y “feriazos” cobraron mayor resonancia y visibilidad, siendo que con anterioridad estas mismas organizaciones llevaron adelante otras medidas de acción, manifestando problemáticas y demandas similares hacia el Estado –nacional, provincial, municipal–? ¿qué problemáticas y demandas se visibilizan a través de los “verdurazos” y “feriazos”? ¿Cómo fue el proceso por el cual la problemática logró instalarse en la agenda pública? ¿Qué actores intervinieron en dicho proceso? ¿Qué intereses se encontraban en disputa?

Por último, se observa que no son sujetos aislados los que demandan, resisten, luchan y negocian, sino que están nucleados en organizaciones más amplias que los contienen. Al observar artículos periodísticos y de universidades, entrevistas televisivas y radiales, una de las organizaciones que tuvo mayor presencia y visibilidad es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)¹, que en aquel entonces formaba parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

¹ Si bien –como veremos en el desarrollo del trabajo– a lo largo de los tres primeros años, se fueron sumando otras organizaciones a los “verdurazos” (muchas de las cuales también forman parte de la CTEP),

En la dirección de dichos interrogantes, en este trabajo nos proponemos reflexionar acerca del proceso de “puesta en agenda” de la problemática de los pequeños productores del Cinturón Hortícola Bonaerense a partir de los llamados “verdurazos” y “feriazos” como forma particular de protesta llevada adelante por organizaciones que los representan y nuclean, en relación a los impactos de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de la alianza Cambiemos y a la transformación de las políticas estatales para el sector entre los años 2016 y julio de 2018.

Para ello, explicitaremos el interés por la temática y el lugar desde el cual reflexionamos. Luego caracterizaremos a la UTT y la zona productiva que es objeto de nuestro trabajo para desde aquí señalar las relaciones cambiantes entre el Estado y las organizaciones. A continuación, realizaremos una descripción y reconstrucción de los “verdurazos” y “feriazos” entre los años 2016 y 2018, acordando en que los problemas para ser reconocidos en tanto tales y considerados como un problema social, deben transcurrir por un proceso de reconocimiento de éstos como problemas legítimos (Álvarez Leguizamón 2001. En Petz, 2010; Hindi, 2014). Daremos cuenta en este apartado de las problemáticas y demandas expuestas en movilizaciones previas a los llamados “verdurazos”, y lo que fue ocurriendo a medida que los mismos se iban sucediendo. Prestaremos especial atención a los impactos generados por las políticas macroeconómicas implementadas por el entonces gobierno nacional. A continuación y vinculado a esto último, intentaremos dar cuenta de las transformaciones de organismos y políticas estatales vinculadas a la agricultura familiar.

Finalizaremos con una síntesis y reflexión sobre lo abordado a lo largo del trabajo monográfico, al mismo tiempo que expondremos nuevos interrogantes que surgen a partir de diciembre de 2019, con la asunción del gobierno de la alianza Frente de Todos.

Para su desarrollo, utilizamos material periodístico –televisivo, gráfico y radial–, materiales de difusión de las organizaciones, páginas web de organismos estatales, decretos y resoluciones, programas de políticas públicas. También recurrimos a informes de coyuntura de observatorios, centros e institutos, artículos académicos, así como a entrevistas propias realizadas en 2016 y 2017 a trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

la UTT cobra un lugar relevante, por un lado en la convocatoria y organización de los mismos, por otro en los medios de comunicación radiales, televisivos y gráficos.

1.1 Del interés por la temática y su relación con el lugar desde el cual reflexionamos

“El país necesita una universidad profundamente politizada; que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación por las necesidades de la comunidad, el afán de resolverlas, y que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional”

(Los profetas del odio y la yapa. La colonización pedagógica; Arturo Jaureche)

Considero fundamental para comprender y situar las inquietudes señaladas, y el interés por la temática abordada en el presente trabajo, explicitar el lugar desde el cual reflexiono. El mismo se relacionan estrechamente con mi participación y experiencia en el equipo de Economía Popular Trabajo y Territorio (EEPTyT) del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) desde el año 2010, en diversos proyectos UBACYT vinculados a la temática de la Economía Popular y a múltiples experiencias en prácticas docentes².

Tanto el trabajo territorial e intersectorial, como las experiencias de investigación y docencia mencionadas, se enmarcan en la perspectiva de la integralidad de las prácticas (Tommasino; 2011)³ que se propone el CIDAC como uno de los desafíos. Nos referimos

² Los objetivos centrales del EEPTyT consisten en acompañar y fortalecer la organización de los trabajadores y trabajadoras de la economía Popular. Para ello, a lo largo de todos estos años de trabajo territorial, hemos establecido vínculos con diversos espacios de trabajo asociativo, cooperativas y organizaciones que nuclean estas experiencias existentes en zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Progresivamente, nos fuimos involucrando con sus problemáticas, demandas y conociendo las especificidades de su trabajo. A su vez, interpelados por aquellas problemáticas, hemos generado espacios de debate teórico sobre la temática, valiéndonos de las herramientas conceptuales que brinda la antropología económica con vistas a ir caracterizando la compleja trama que configura los procesos económicos populares. Con el correr de los años, los integrantes del equipo, comenzamos a participar en proyectos UBACyT vinculados a la temática y orientados desde el trabajo territorial que venimos desarrollando. A su vez, y a partir de la llegada formal de las prácticas de extensión universitaria a espacios de validación curricular, denominadas en nuestra facultad Prácticas Socioeducativas Territorializadas, que comienzan a implementarse en 2017, se avanzó desde el marco del equipo de EPTyT en la realización de un primer seminario: “Prácticas en Economía Popular: un abordaje desde la Antropología” en articulación también a una demanda concreta por parte de las organizaciones con las cuales nos vinculamos. Esta modalidad permitió a aquellos estudiantes que participaban en el equipo, tener una primera experiencia docente en calidad de adscriptos. Posteriormente, varios nos incorporamos también como adscriptos y/o ayudantes a la materia Antropología Sistemática II (Antropología Económica).

³ Tommasino propone a la extensión como el ámbito transformador por excelencia de las modalidades formativas dispuestas en la estructura de claustros, cátedras e institutos. Si bien la producción académica se expresa y prolifera en abundancia en la docencia y en la investigación, es desde la extensión, dirá el autor, donde se genera nuevas formas de producción y co-producción de conocimiento, tomando como estrategia la integralidad de estas prácticas.

con ello a la integración de las tres prácticas universitarias (Extensión, Investigación, Docencia) donde la extensión articule como motor de las otras dos. Siguiendo a Trinchero y Petz (2014), desde la práctica activa de extensión surgen problemáticas que demandan procesos de sistematización propios de la investigación, que por su aporte a la construcción de conocimiento se desplieguen hacia la docencia y procuren impactar en la formación curricular y extracurricular de los estudiantes. Los autores sostienen que de esta manera *“las problemáticas barriales, locales, territoriales que abordamos desde la extensión y las reflexionamos a partir de la investigación, son susceptibles de ser abordadas en tanto contenidos en la currícula de las carreras. Incorporar contenidos referidos a las problemáticas nacionales más urgentes en el proceso de formación de los futuros profesionales es una de las maneras de establecer mayores niveles de pertinencia de las universidades públicas en relación a su compromiso con las realidades en las que se encuentra enclavada”* (2014:148).

En este sentido y respecto a la construcción de conocimiento, se apuesta desde el CIDAC a lo que se ha llamado *democratización epistemológica*⁴. Se trata de poner en común los saberes y conocimientos de la universidad con los saberes y conocimientos de los sectores populares. Siguiendo a Larsen *“hablamos de democratización porque implica un ejercicio de igualación en el proceso de validación de estos saberes, en función de construir un nuevo tipo de conocimiento superador y/o innovador, que tenga como objetivo responder a las necesidades sociales existentes en el territorio”* (2014:1). Se trata entonces de poner en acto el principio de democratización epistemológica concibiendo la agencialidad epistémica y política de los sectores populares⁵.

Quisiéramos señalar entonces que el tema a tratar en el trabajo monográfico se enmarca en un interés más amplio vinculado a los espacios de participación antes mencionados. El mismo refiere a las prácticas económicas populares y el proceso de formación y crecimiento de espacios organizativos alrededor de ellas (como es el caso de la CTEP hoy UTEP) en pos de su institucionalización, al mismo tiempo que la relación

⁴Expresa la idea de que es necesario crear condiciones para la participación de la mayoría de la población en los procesos de generación y validación de conocimiento teórico y técnico-metodológico. Siendo así, se parte de considerar que el trabajo participativo no debe ser pensado exclusiva y excluyentemente en términos de acción y sobre todo de acciones aplicadas, sino también en términos teóricos e ideológicos entendidos como necesariamente complementarios y no como antagonicos. En línea <http://www.cidac.filo.uba.ar/presentaci%C3%B3n-0>

⁵ Aclaremos que los procesos y desafíos que venimos mencionando no están exentos de conflictos y tensiones. Para profundizar sobre estos aspectos recomendamos la lectura de Hindi y Cervera Novo; 2017.

de dichos espacios con el Estado y las políticas públicas. Consideramos que son estos espacios colectivos los que le otorgan a los sujetos un rol en la disputa política pues “el poder hablar” en representación de un grupo es lo que hace que el mismo pase de ser un conjunto de individuos a ser una fuerza política. El hecho de que, en general se considere que las clases trabajadoras existen se basa en su representación política por parte de los aparatos políticos sindicales, y de los partidos oficiales (Gledhill; 2000 En Hindi 2014, pp 154).

En lo que respecta al marco teórico general del trabajo, comprendemos la “puesta en agenda” de la problemática de los pequeños productores del Cinturón Hortícola Bonaerense nucleados en la UTT, a la luz de la propuesta de la antropología económica, centralmente las producciones que aportan al campo desde la económica política. En tal sentido acordamos en que las relaciones sociales particulares y los procesos económicos de las sociedades contemporáneas están enmarcados en procesos complejos mayores, y dan cuenta de una totalidad histórica. Nos distanciamos así de los estudios en los cuales el sujeto es escindido del proceso histórico. (Petz, 2010; Hindi, 2014)

Recuperamos entonces la crítica neomarxista, la cual nos permite caracterizar la dinámica de las economías domésticas en el marco de los procesos de acumulación capitalista (Meillasoux 1977, Stoler 1987), realizando un análisis en clave de conexiones orgánicas dentro de una totalidad. Estos trabajos nos permiten ver el modo en que las economías domésticas contribuyen a la reproducción del capital a través de diversas formas de transferencia de valor al sector capitalista.

En lo que respecta a las dinámicas económicas de la zona sur del CHB, las comprendemos entonces en tanto producciones históricas, y no como entidades naturalizadas y fetichizadas (Trincheró y Balazote, 2017; Hindi 2014).

Por otro lado, y en lo que respecta al objeto específico de nuestro trabajo, referido a la puesta en agenda de la problemática veremos cómo las necesidades y demandas expresadas por las organizaciones lograron politizarse, “*colocarse en agenda pública*”. En este sentido, sostenemos que el proceso por el cual algunas necesidades y demandas son socialmente problematizadas⁶ depende de un complejo campo de fuerzas donde “*los movimientos, partidos, organizaciones e individuos, según sus posicionamientos en*

⁶ Oslak y O`Donell, llaman “Cuestiones” a estas necesidades y demandas socialmente problematizadas. Según los autores, ninguna sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender la lista de necesidades y demandas de sus integrantes. Solo algunas son “problematizadas” en el sentido de que ciertas clases, fracciones de clase, organizaciones, grupos o incluso individuos estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse “algo” a su respecto y están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. (Oslak y O`Donell; 1976)

la sociedad y sus diferentes cuotas de poder, priorizan o seleccionan ciertas cuestiones, y también los modos de resolverlas” (Niremberg, 2006: 24).

En vinculación con lo anterior, al hablar de Políticas Estatales o Públicas, nos referiremos al *“conjunto de acciones y omisiones que ponen de manifiesto una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de diversos actores de la sociedad civil” (Oslak y O`Donell, 1976:112).*

2. CARACTERIZACIÓN DEL CINTURÓN HORTÍCOLA BONAERENSE (CHB) Y DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA TIERRA (UTT)

Cuando hablamos de “Cinturón Hortícola” o –como también se denomina–, de “Cinturón Verde”, nos referimos a aquellas zonas cuyas producciones de quintas o huertas se caracterizan por ser de tipo familiar y rodear a las grandes ciudades, con un tamaño promedio de 7 hectáreas y una diversidad de diez tipos de cultivos para consumo fresco, baja tecnología y gran inversión en mano de obra⁷.

Específicamente, el CHB⁸ tiene una extensión de 7000 km², en un radio de 50 km alrededor de la capital federal y se encuentra constituido por tres cordones indicados del 1 al 3 en función de su cercanía a la misma⁹. Tomados conjuntamente, entre los tres producen para el consumo fresco directo y abastecen entre el 60% y el 90% de las verduras consumidas por el área metropolitana (Morey, 2002; Hindi, 2014).

Como se expresa en varios artículos del IADE¹⁰, el cinturón verde de La Plata hoy se posiciona como la región hortícola más importante de la Argentina. Aquí se emplaza

⁷ Vale aclarar que, además del Bonaerense, en nuestro país existen numerosos “Cinturones Verdes” dispersos alrededor de las principales ciudades de diversas provincias como Tucumán, Salta, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fé, Corrientes, Entre Ríos, etc. https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-mm_0901.pdf

⁸ Llamado también Área Hortícola Bonaerense (AHB) o “Cinturón Verde”, por su constitución como centro de producción y distribución de productos hortícolas frescos para la Ciudad de Buenos Aires a mediados del siglo pasado

⁹ El primer cordón está compuesto por las localidades de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Moreno, Morón, Gral. Sarmiento, 3 de febrero, Gral. San Martín, San Isidro, Tigre, Vicente López, Merlo. El segundo cordón está compuesto por las localidades de Florencio Varela, Berazategui, La Plata, San Vicente, Almirante Brown y Esteban Echeverría. El tercer cordón está compuesto por las localidades de Berisso, Ensenada, La Plata, Lobos, Gral. Rodríguez, Escobar, Pilar, San Vicente, Cañuelas y Marcos Paz.

¹⁰ Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. <http://www.iade.org.ar/>

más del 60% de los invernáculos del país, siendo el partido con más cantidad de productores hortícolas y volumen de producción nacional que abastece principalmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

En este trabajo nos centramos entonces en organizaciones que representan y nuclean “pequeños productores hortícolas” de la zona sur del CHB –principalmente, localidades de los partidos de Florencio Varela, Berazategui y La Plata–. Específicamente, haremos referencia a la Unión de los Trabajadores de la Tierra.

Dicha organización se define a sí misma como organización de tipo gremial que se unieron *“para mejorar nuestra vida, nuestras condiciones de producción y comercialización, y defender nuestros derechos; como acceder a tierra propia.”*

La misma, representa y nuclea a “familias de pequeños productores” en distintas provincias de nuestro país. En lo que respecta a lo que ellos definen como Buenos Aires Sur (La Plata, Florencio Varela y Berazategui) trabajan con 5.612 familias.

En lo referido a la zona mencionada, en diferentes artículos periodísticos y entrevistas televisivas, radiales y gráficas, referentes e integrantes de la UTT caracterizan a los sujetos a los que representan y nuclean, como trabajadores sin tierra propia, la mayoría medieros o arrendatarios, en su mayoría de nacionalidad boliviana, con condiciones de vida muy precarias. Respecto a las problemáticas, en artículos y entrevistas previas a la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2015, pueden rastrearse como constantes el acceso a la tierra, las cadenas de comercialización y vinculado a ambas la inserción en un modelo de producción *“(…) que es el agronegocio (…) los dos grandes perdedores que tiene ese modelo son los que producen y los que consumen (…) los grandes ganadores son los dueños de la tierra, todos los intermediarios y sobre todo las grandes empresas multinacionales que son las que producen las semillas y agroquímicos”.*

3. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y LA RELACIÓN ESTADO-ORGANIZACIONES SOCIALES

Ahora bien, como dijimos, la UTT es una de las tantas organizaciones presentes en la zona a la que nos referimos en este trabajo. Como veremos a continuación, en torno a los verdurazos se da un proceso organizativo y político que no surge en diciembre de 2015. Al respecto, diversos autores, informes de institutos de investigación y de organismos estatales mencionan como una de las tantas problemáticas de estos sujetos y del sector, la falta de organización y representación política gremial y como a lo largo de estos últimos 15 años se avanzó en esa dirección. En este sentido, consideramos que los “verdurazos” y “feriazos” –con las problemáticas, demandas y sujetos que visibilizan– y el proceso organizativo en torno a los mismos, deben comprenderse como parte de un proceso político más amplio, que marca formas de relacionamiento de las organizaciones sociales con el Estado.

En este sentido proponemos una definición de estado ampliado en términos de Gramsci. El mismo, en tanto entiende a la sociedad civil como parte del Estado, implica el reconocimiento de la politización de esta y reivindica su lugar en la realidad social. (Soarez, 2000) Es decir, la sociedad civil como ámbito “privado de hegemonía”, se incorpora en la construcción de consentimientos y en la configuración misma del Estado, en un momento histórico dado (Gramsci, 1993). Las articulaciones, negociaciones y conflictos entre la sociedad civil y la sociedad política se vuelven primordiales en otorgarle sentido y dirección a la acción pública.

Al mismo tiempo retomamos la definición de A. Argumedo acerca de “la forma del Estado” la cual *“da cuenta de la particular articulación política, económica, social y cultural de cada realidad nacional en un momento histórico; es la resultante del proyecto estratégico de las clases sociales que alcanzan el poder estatal, de las condiciones ante las cuales se enfrenta ese proyecto y de su correlación de fuerzas con los campos político-sociales antagónicos, en una sociedad incorporada dentro del contexto mundial.”* (Argumedo, 1992: 250)

Contextualizando históricamente, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, llevaron adelante una serie de políticas socioeconómicas primero, como salida a la grave crisis social, económica y política de 2001¹¹ y 2002, y luego, para consolidar un modelo

¹¹ Siguiendo a Petz (2010), comprendemos los sucesos del año 2001 como cambio de una etapa política y crisis de un proceso hegemónico a partir del concepto de “acontecimiento”, en tanto hecho detonante que reformula el proceso histórico anterior y produce un escenario diferente en el conjunto de una sociedad o en la arena mundial, cuyas potencialidades están siempre inscriptas en la historia anterior y su

que se propuso alinear los objetivos de crecimiento económico con los de inclusión social. Aunque la evaluación de las políticas del ciclo de gobiernos kirchneristas difiere según los analistas y los aspectos que se consideren, durante esa gestión se registraron avances y mejoras de los indicadores sociales básicos y de calidad de vida. En esos años también se reconocieron nuevos derechos sociales y se realizaron reformas normativas que restablecieron otros que en décadas anteriores habían sido restringidos (Informe CELS, 2017).

A su vez, y lo que aquí nos interesa señalar, comienza a delinearse un trayecto que acerca, interpela e involucra cada vez más a las organizaciones y movimientos sociales que protagonizaron la resistencia política al neoliberalismo de los 90, y espacios organizativos conformados con anterioridad¹². Es que, a diferencia de la década del 90, donde la relación entre el Estado Nacional y las organizaciones sociales, se basaba principalmente en mesas de negociación y en el acceso a “planes”, donde el interés del Estado era contener el conflicto social, aquí desde el Estado se los convoca a una participación y articulación que trasciende esas instancias.

En este contexto, y vinculado al tema de este trabajo, en lo que respecta a la “Agricultura Familiar”, se crearon e implementaron diversas políticas estatales desde diferentes agencias¹³, al tiempo que se crearon nuevos organismos vinculados al sector (como es el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, a la cual nos referiremos más adelante¹⁴) con el fin de consolidar las formas de producción familiar implementar mejoras productivas, impulsar nuevas actividades tendientes a incorporar valor agregado y plantear formas asociativas y otros canales de comercialización. En síntesis, se le dio entidad y envergadura a los sujetos de la “Agricultura Familiar” y sus problemáticas, que por primera vez se vieron reflejadas en secretarías, direcciones nacionales, áreas de investigación, extensión y capacitación específicas (incluso en organismos como el INTI,

carácter es siempre político (Argumedo; 1993). Consideramos que uno de los aspectos más significativos de dicho “acontecimiento” radica en el modo en que el Estado volvió a ponerse en debate, visibilizando la centralidad del problema del “poder”.

¹² Por ejemplo, la Mesa Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar en el año 2003 (Hindi, 2014)

¹³ Se destacan luego de 2008 nuevas herramientas de inclusión previsional, fiscal y de seguridad social (monotributo social y agrario, RENATEA), de financiamiento (CONAMI), apoyo productivo (PTA, Repro), capacitación (creación de áreas específicas en INTA, INTI, SENASA, SAF..

¹⁴ Se le dio rango de Secretaría a las políticas que acciones sobre el sector de la Agricultura Familiar, en la cual su principal objetivo era mejorar las condiciones de producción, distribución y comercialización del sector.

INTA, SENASA, la Secretaría de Políticas Universitarias y varias Universidades Nacionales)¹⁵.

A su vez, tal como sostienen Valverde y Balazote¹⁶, no se puede afirmar que las dificultades de los pequeños productores comenzaron en diciembre de 2015. Ciertas políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de Cristina Kirchner afectaron sus márgenes de rentabilidad. Nos referimos en particular a las retenciones aplicadas a las exportaciones (derechos de exportación) y a la política cambiaria que fijaba un valor dólar sensiblemente retrasado. Sin embargo, en compensación, la compra de insumos importados –imprescindibles para la producción– se realizaba también al precio de un dólar muy rezagado, los servicios estaban fuertemente subsidiados y el gasoil tenía (al menos en cierto período) un precio diferenciado.

Ahora bien, entendemos que, a partir de 2015, se inicia un nuevo proceso hegemónico, y en términos de Argumedo, nos encontramos bajo una “nueva” forma de Estado que redefine su relación con las organizaciones sociales.

En términos generales, desde su asunción en diciembre de 2015, el gobierno comenzó a implementar una serie de políticas macroeconómicas que implicaron *“una fuerte transferencia de ingresos a los sectores concentrados de alta renta; la reedición de un modelo de acumulación centrado en la primarización de la economía y realineamientos de la política exterior en subordinación a los intereses de las grandes corporaciones y países centrales”*¹⁷.

Algunas de estas decisiones políticas de alto impacto en los sectores populares y la clase media fueron la anulación de las restricciones cambiarias (liberalización del mercado de

¹⁵ Algunas críticas referidas a la implementación de estas políticas se vinculan con que si bien representan un cambio cualitativo y cuantitativo muy grande respecto al período previo (1976-2001) las respuestas estatales han carecido de una visión estratégica integral sobre cómo incrementar el potencial del sector.

¹⁶ <http://www.infonews.com/nota/301190/las-politicas-economicas-que-derivaron>

¹⁷ Tal como analiza el Observatorio de las élites Argentinas de la UNSAM, en la integración del Gabinete que asumió esta agenda resulta significativo que más de un 31% haya ocupado “alguna vez un puesto gerencial en una empresa privada” y que, en particular, “en la Jefatura de Gabinete de Ministros, la proporción de CEO llega casi al 70%”. Muchos de los funcionarios actuales (uno de cada cuatro) se desempeñaban en el sector privado al momento de ser convocados por el gobierno, fenómeno que la bibliografía especializada ha dado en llamar “puerta giratoria”. De esos ochenta y seis casos, sesenta ocupaban los puestos más altos en las empresas de origen. En su mayoría, ingresaron en el Banco Central, en los ministerios de Energía, Producción, Agroindustria y Hacienda, y también en otras carteras de peso en materia social, como la Jefatura de Gabinete, Interior y Trabajo. Además, venían de desempeñarse en tres sectores particularmente sensibles a la regulación estatal: el bancario y financiero, el energético y el de servicios profesionales (seguros, consultorías, grandes estudios jurídicos). Paula Canelo, Ana Castellani y Mariana Heredia (coords.), Informe de Investigación nº 1, Observatorio de las Élites Argentinas, 2017, disponible en <www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/observatorio-elites-argentinas>.

cambios), seguida de una fuerte y continua devaluación; la eliminación de retenciones a cereales (trigo, maíz) y minería y una baja progresiva de las retenciones a la soja¹⁸; liberalización del precio del combustible; el aumento constante de las tarifas de los servicios públicos con la consecuente quita de subsidios de los mismos y la condonación de deudas a empresas distribuidoras de electricidad; la apertura del mercado externo permitiendo el ingreso de diversidad de productos importados que compiten con los propios. Todo ello, significó el aumento del costo de vida y de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, subconsumo y achicamiento del mercado interno, entre otras (Informe CELS, 2017; Manzanal, 2016).

Como veremos a continuación, las políticas mencionadas impactan gravemente en producción y comercialización de los productores hortícolas del CHB –profundizando las problemáticas históricas del sector– que, sumadas a la transformación y/o desfinanciamiento de ciertos organismos estatales y programas vinculados a la Agricultura Familiar¹⁹, afectan seriamente las condiciones de vida del sector.

4- LOS “VERDURAZOS” Y “FERIAZOS” EN EL PERIODO 2016-2018

4.1. Los antecedentes

“hacer la historia social de la emergencia de esos problemas, de su constitución progresiva, quiere decir, del trabajo colectivo – frecuentemente realizado en la concurrencia y en la lucha– por el cual se fue haciendo necesario dar a conocer y hacer reconocer estos problemas como problemas legítimos, confesables, publicables, públicos, oficiales (...). Por medio de este trabajo, fue preciso que hubiese reuniones, comisiones, asociaciones, ligas de defensa, movimientos, manifestaciones, peticiones, requerimientos, deliberaciones, votos, tomas de posición, proyectos, programas, resoluciones, etc. Para que aquello que era o podría haber continuado siendo un problema privado, particular, singular, se tornase en un problema social, en un problema público del que se pueda hablar públicamente...”

(Bourdieu; 1995:179)

Tal como expusimos en la introducción, tres movilizaciones previas a los “verdurazos” fueron realizadas por más de 35 organizaciones agrarias y cooperativas²⁰ que nuclean y

¹⁸ Hasta fines de 2015, los aranceles de exportación tenían una alícuota del 35% para la soja, 23% para el trigo y 20% para el maíz. En: Informe CELS + Disponible en <http://www.eleconomista.com.ar/2018-04-piden-acelerar-la-quita-retenciones/>:

¹⁹ En este trabajo solo haremos referencia a las transformaciones y/o desfinanciamiento de organismos y programas que han sido mencionados reiteradamente –por las organizaciones, especialistas de universidades nacionales, institutos diversos que abordan la temática, trabajadores de aquellos organismos, etc.– y que son consideradas de gravedad por los sujetos.

²⁰ UTT: Unión Trabajadores de la Tierra-CTEP; ASOMA: Asociación de Medieros y Afines; Asociación de Productores de la Economía Regional; Asociación de Productores Familiares "El Guadalquivir"; Asociación

representan a productores familiares de alimento de la zona sur del CHB. Específicamente Gran La Plata, Florencio Varela y Berazategui.

Mencionaremos brevemente cada una de ellas, dando cuenta de las problemáticas y demandas comunes, así como las respuestas estatales frente a las mismas, ya que las consideramos claves para comprender los sucesivos verdurazos y feriazos como forma de protesta. Las tres se realizaron para exponer las problemáticas que estaban atravesando y con el objetivo de concretar políticas adecuadas para el sector, a través de la solicitud de mesas de trabajo con funcionarios del Estado.

La primera de estas movilizaciones se llevó a cabo en enero de 2016 hacia el municipio de La Plata y la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires *“en representación de familias de pequeños productores, campesinos, trabajadores de la tierra, que padecen desde hace tiempo una grave situación, que hoy se está transformando en una crisis terminal para muchos que nos veremos obligados a dejar la producción”*²¹. Ante la falta de respuesta estatal, el 31 de marzo las organizaciones convocan a una jornada de paro y movilización de quinteros con concentración en principales rutas de circulación de verduras (RUTAS 2, 36 Y 53; Av. 520, Av. 44; Camino Centenario) manifestando la emergencia en la producción hortícola, y señalando nuevamente que *“(…) los pequeños productores se enfrentan a una de las crisis más profundas de la historia”*, planteando la necesidad de respuestas urgentes por parte del Estado. Por último, en el mes de mayo, y a un mes del “Paro Quintero”, nuevamente convocaron y realizaron una movilización, esta vez al Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires.²²

Pioneros de mi tierra; Asociación la Primavera; Cooperativa 12 de agosto; Asociación 2 de diciembre; Cooperativa la Unión Renovada; Cooperativa La Unión Limitada; Cooperativa San Roque; Cooperativa Frutihortícola "La Nueva esperanza"; Cooperativa Moto Méndez; Cooperativa Agrícola la Unión Limitada; Cooperativa Nueva Esperanza; Asociación de Productores Hortícolas Independientes; Ecco Rural; Asociación Tierra Mía; Cooperativa las Acacias; Asociación 15 de Abril; Asociación San roque; Asociación Colectividad Boliviana del Sur; Movimiento de Pequeños Productores; Asociación 1610 la capilla; Asociación Tierra Fértil ASEN; Cooperativa Parque Pereyra; Cotraip; MNCI-VIA Campesina; Frente Agrario Evita, entre otras.

²¹En:

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_El_sector_de_pequenos_produtores_hortícolas_y_floricolas_esta_en_emergencia_y_movilizados
<http://ctepargentina.org/2105-2/>

²² Nos interesa señalar que, el Ministro de Agroindustria de la Pcia. de Bs.As, Leonardo Sarquís, ocupó el cargo de gerente general de la división de semillas vegetales para Argentina, Uruguay y Paraguay en la multinacional Monsanto de 2005 a 2007; desde 2009 hasta 2015 se desempeñó como Gerente General en la consultora Confiagro, creada en 2002 y dedicada a brindar servicios sobre gestión y estrategias

Dicha “crisis terminal” y “una de las más profundas de la historia”, hace referencia a problemáticas de larga data, que se vieron agravadas con las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de la alianza Cambiemos, desde diciembre de 2015, afectando seriamente la producción y comercialización.

En diversos comunicados de convocatoria a dichas movilizaciones, las organizaciones manifiestan que la devaluación provocó el aumento de los insumos necesarios para producir “todo sometido a un modelo en base a agroquímicos a precio dólar” – fertilizantes, semillas, polietileno para invernáculos, etc.-; al mismo tiempo aumentaron los alquileres de la tierra “pagamos hasta \$5.000 la hectárea”.

Al encarecimiento de los insumos utilizados en la producción y alquileres de tierra se suma la quita de subsidios y tarifazos implementados en los servicios públicos, específicamente en este caso la energía eléctrica utilizada para el riego y consumo humano que aumentan los costos de producción entre un 100% y un 300%. Se liberó asimismo el precio del combustible, lo cual impactó en el precio del gasoil utilizado para el funcionamiento de los vehículos para el trabajo –tractores-, que por cierto también son alquilados.

A su vez exponen que el mercado interno está “achicado por la inflación”, y que la “comercialización [está] llena de intermediarios que hace que nuestros productos lleguen al consumidor con un aumento de hasta a veces el 1.000%”.

Por último, y en referencia a la quita de retenciones (derechos de exportación) a los cereales –trigo, maíz– y minería, y reducción de la retención a la soja, las organizaciones expresan que *“el ejecutivo nacional ha tomado medidas para el campo que solo benefician a los grandes terratenientes y a los monopolios exportadores. La devaluación y la caída de las retenciones han asegurado ganancias fabulosas a estos sectores, mientras que para el pequeño significa aumento de los insumos, de los arrendamientos, de los alimentos para la cría de animales etc.”*²³

comerciales a empresas y negocios del sector Agroindustrial. Respecto al Ministro de Agroindustria de la Nación, en el año 2016 desempeñaba la función Ricardo Burayle, quien fue reemplazado en octubre de 2017 por Luis M. Etchevehere, el cual se desempeñó como presidente de la Sociedad rural desde 2012 hasta su asunción en dicho cargo. Esto ilustra claramente los lineamientos político económicos del gobierno, y los sectores que se verán favorecidos a partir de dichas decisiones. Tal como lo expresan investigadores del CESO *“se trata de volver a una política centralizada y tecnocrática, ligada al modelo agroexportador, donde no se produce para el mercado interno sino para la exportación, y sus actores son los grandes productores”* (Informe CESO, febrero 2016)

²³ <http://ctepargentina.org/2105-2/>

Las demandas inmediatas hacia el Estado (nacional, provincial y municipal), consisten puntualmente en el pago del subsidio de \$ 5.000 que fue otorgado y es adeudado desde agosto de 2015; subsidio al gas-oil y tarifa social para la electricidad; medidas ante la emergencia (fondos de insumos para producir, semillas, abonos, herramientas etc.); línea de créditos blandos de los bancos oficiales, a tasa subsidiada, para afrontar la emergencia y no tener que recurrir a la usura “pagamos el 70% o más de Intereses”.

Las demandas a mediano plazo consisten en un precio mínimo sostén y compensatorio para los principales productos de la quinta y precio sostén-tope para la verdura y su regulación en los mercados concentradores, lo cual *“garantizará ingreso para el trabajador que la produce, y un precio accesible para el consumidor”*; regulación de los alquileres *“hasta tener una ley de arrendamiento y aparcería rurales que beneficie al sector”*; posibilitar de acceso a tierras para producir y vivir, fiscales o tierras ociosas expropiadas por el estado; reglamentación y presupuesto para la *“Ley de reparación histórica para la agricultura familiar”*²⁴.

En relación a la última movilización previa al primer verdurazo y, haciéndose eco del contexto general por el que atravesaba nuestro país en aquel entonces, un comunicado de la CTEP expresa *“No nos quedamos callados ni pasivos. No estamos solos, confluimos en las calles con los estatales, los docentes, los profesionales, los trabajadores del Astillero etc. como parte de un pueblo que hoy dice NO AL AJUSTE, NO A LOS TARIFAZOS, NO A LOS DESPIDOS, NO A LA RUINA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES”*

En referencia a las razones de esta movilización, Nahuel Levaggi (UTT-CTEP) en una entrevista televisiva, y en respuesta a una panelista que indagaba sobre si era necesario “cortar una calle” y por qué “no recurrir a otros canales de comunicación y diálogo”, expone enfáticamente que *“en la medida que el pueblo no se organice y presione por sus intereses, acá las cosas no salen (...) acá hay una discusión que son los intereses del pueblo y para que el pueblo resuelva sus problemas, el único camino es organizarse y presionar de la misma manera que presionan todos los poderosos, solo que los poderosos no tienen que juntarse miles en una calle para presionar, alcanza con levantar un tubo y tener la cadena de televisión propia o ser parte del gobierno como es ahora”* y finaliza planteando que *“las leyes son herramientas que pueden servir para determinado fin,*

²⁴ En diciembre de 2014 el Parlamento Nacional aprobó la Ley N° 27.118 de “Reparación histórica para la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, que aún no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional.

pero si no hay un movimiento social que presione para que eso se cumpla, una ley es un papel escrito que no vale nada”.

Nos interesa señalar aquí que, en el contexto de “crisis terminal” que denuncian las organizaciones, en agosto de 2016 se conforma la rama agraria de la CTEP. Las organizaciones allí reunidas, expresaron *“el reconocimiento del campesinado y de la agricultura familiar como integrantes de la economía popular, con demandas particulares hacia el Estado provincial y nacional.”*²⁵ Al mismo tiempo, reivindicaron el papel de la CTEP como herramienta de lucha de los sectores populares, en un contexto donde *“la construcción en unidad resulta clave para dar pelea al avance de políticas neoliberales de constante precarización y ajuste a los trabajadores de la economía popular en su conjunto, históricamente silenciados y postergados por las clases dominantes”*²⁶.

Sin embargo –y en paralelo al proceso organizativo que como se observa se fue desarrollando–, a pesar de haber logrado distintas reuniones con funcionarios del gobierno nacional y provincial, no obtuvieron respuestas ni soluciones concretas por parte del Estado en sus tres niveles frente a las problemáticas y demandas expuestas.

De aquí en más veremos cómo, a lo largo de estos tres años (2016-2018), las problemáticas y demandas hacia el Estado planteadas en las movilizaciones que mencionamos, se reiterarán en las medidas de protesta que se sucederán. Al mismo tiempo, se sumarán otras problemáticas y cobrarán forma diversas propuestas de las organizaciones hacia el Estado.

²⁵ Un aspecto que me interesa mencionar y que se vincula con lo que llamó mi atención de los “verdurazos”, es como desde 2011 al presente año, la CTEP fue ampliando su representación de trabajadores, incorporando, en el marco de la EP, un conjunto diverso de actividades económicas, entre ellas la agricultura familiar, campesina e indígena.

²⁶ Algunas de las problemáticas y demandas que se harán manifiestas a través de los “verdurazos”, se explicitaron ya en este encuentro: “la profundización de **un modelo productivo agropecuario excluyente y extranjerizado**, mediante la implementación de medidas macroeconómicas tales como la liberalización del dólar y la quita de retenciones a los “commodities” que favorecen el aumento de ganancias de los sectores vinculados al agronegocio, sumado a la concentración de la renta agraria hacia ese sector debilitando las economías locales de base campesina y familiar”; el cierre y abandono de programas y políticas del gobierno nacional hacia la agricultura familiar; por último, se manifestó también “la necesidad de **profundizar las luchas por el acceso a la tierra y el agua**, y por políticas y programas estatales para el mejoramiento de las condiciones de producción y comercialización de los pequeños productores de alimentos”

4.2 El primer “Verdurazo”

Como expusimos anteriormente, sin respuestas ni soluciones concretas por parte del Estado frente a las problemáticas y demandas manifestadas por las organizaciones, el 14 de septiembre de 2016 se realiza el primer “verdurazo”; en línea con el llamado “frutazo” realizado por productores de Río Negro y Neuquén el 23 de agosto del mismo año en Plaza de Mayo.

Como veremos a continuación, y más allá de la particularidad de la medida, nos interesa señalar que la demanda por acceso a la tierra cobrará forma de proyecto de ley y, lo que será una constante en los sucesivos verdurazos y posteriores feriazos, “la diferencia entre el precio que le pagan al productor por las verduras y hortalizas y lo que pagan los consumidores en verdulerías y góndolas de supermercado”.

Mientras se desarrollaba el Foro de Inversiones y Negocios²⁷ en el Centro Cultural Kirchner, cerca del mediodía y a pocas cuadras– en Plaza de Mayo– Pequeños productores de la zona sur del CHB, nucleados en la UTT-CTEP, regalaban 20.000 kilos de verduras para hacer visible la crisis del sector, la precariedad de sus condiciones de producción y comercialización, y reclamar por el tratamiento de un proyecto de Ley de acceso a la tierra, presentado horas antes a un grupo de diputados frente al Congreso de la Nación. Una multitud de personas –hombres y mujeres, jóvenes, jubilados, desocupados, con bolsas y changuitos– fue acercándose desde temprano, haciendo largas colas para poder llevar a sus casas un poco de verdura gratis. Postal elocuente de la crisis económica y social que comenzó a atravesar nuestro país, y de los sectores que se verán favorecidos con el plan del gobierno, cuya centralidad pasa por la valorización financiera y la transferencia de recursos a los sectores concentrados de la economía – entre ellos, el agroexportador y los vinculados a la megaminería–.

Como mencionamos, cerca del mediodía, cuando algunos llevaban más de cuatro horas de espera, llegó la columna de la UTT por Avenida de Mayo, encabezada por un tractor, detrás las banderas verdes y rojas de la organización y un millar de familias de productores, muchos de ellos con cajones de verduras y hortalizas al hombro. Tras ellos, cuatro camiones cargados también con cajones de verduras y hortalizas. Luego de dar

²⁷ Entre sus principales invitados, estuvieron presentes varios CEOs y presidentes de algunas de las empresas agroindustriales más beneficiadas por las políticas devaluatorias y de liberalización de las exportaciones como: Antonio Aracre, Director de Syngenta para América del sur; Alejandro G. Elsztain, CEO de Cresud; Amancio Oneto, CEO de Molinos Río de la Plata y Gonzalo Tanoira, presidente del Directorio de la multinacional San Miguel.

la vuelta a la plaza se instalaron frente a la Catedral y, desde allí, comenzaron el reparto.²⁸

En esta instancia volvieron a manifestar las mismas problemáticas expuestas en movilizaciones anteriores y otras se sumaron. Un referente de la UTT señala que *“El panorama viene de mal en peor. A los aumentos en los servicios, los alquileres, los insumos, se sumaron también la apertura importadora, la baja del consumo y el aumento de los desalojos”*²⁹. Remarcaron también como problemático el sistema de comercialización *“(…)con una diferencia promedio del 400% entre lo que recibe el trabajador en su quinta o chacra y lo que paga el vecino en el barrio”* indicando que *“el sector produce los alimentos que todo el mundo consume y genera desarrollo de la economía local”*, sin embargo son los intermediarios, los mercados concentradores y las grandes cadenas de supermercados las que fijan el precio *“para un lado y para el otro: para los productores y para los consumidores”*.

Puntualmente, los reclamos fueron el tratamiento del proyecto de ley para el acceso a la tierra por parte de pequeños productores, la *“suspensión de los desalojos a los campesinos de sus tierras”*, la *“inmediata reglamentación y asignación de presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar”*, y el *“apoyo para el fortalecimiento de la producción y la comercialización de los pequeños productores y las economías regionales”*. En referencia al proyecto de ley, señalaron que *“así como pagamos el alquiler, podríamos pagar un crédito y avanzar en dignidad, arraigo y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Hay mucho territorio concentrado en pocas manos, y miles de pequeños productores sin tierra y campesinos queriendo ser desalojados”*

En esa dirección, en diversas notas periodísticas, referentes de la UTT, especificaron que los pequeños productores de la zona, al tener que alquilar las tierras, se enfrentan a la especulación inmobiliaria producto de la desregulación de alquileres, y al el avance de

²⁸ <https://www.eldestapeweb.com/las-impactantes-imagenes-del-verdurazo-n20830>

²⁹ Al respecto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala como problemáticas comunes de los *“productores hortícolas”*, y como razones que los han llevado a *“esta crítica situación”* los aumentos de los costos de producción, que incluyen nuevos precios de arrendamiento, y la dificultad de comercializar su producción debido a los bajos precios de venta que les imponen los intermediarios. Dicho informe sostiene que *“las medidas macroeconómicas implementadas por el Gobierno Nacional, como la devaluación del 50% y el consecuente aumento de los insumos para la producción, los incrementos en las tarifas de energía eléctrica (fuente indispensable para el riego de los sistemas hortícolas), y la suba de combustibles, entre otros aumentos, han generado que los costos de producción prácticamente se hayan duplicado”*. También se explicita que *“los intermediarios que compran la mercadería de estos productores suelen hacerlo a un precio demasiado bajo como para afrontar estos nuevos costos de producción”*.

los countries sobre la zona de quintas *"Hoy, los countries compiten por el precio de la tierra con las quintas que producen lechuga y acelga"*.

El Proyecto de Ley³⁰, propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar. El objetivo del mismo, consiste en facilitar el acceso a créditos blandos que posibiliten la compra de tierra por parte de los pequeños productores que no tienen acceso a ellos. En palabras de integrantes de la UTT *"sería como un PROCREAR RURAL con tierras productivas que transfiera el Estado Nacional (...)"*.

Resulta interesante señalar aquí las declaraciones posteriores al "verdurazo" realizadas por el entonces Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, ya que se convertirán en puntapié para la realización y consolidación de los "Feriazos" a lo largo de los años siguientes. El mismo se refirió al reclamo de los trabajadores agrupados en la UTT afirmando que *"no quedó claro por qué venían"* y *"nunca me pidieron reunión"*. Asimismo, en un tono despectivo y minimizando las acciones de los trabajadores agrarios, dijo que *"en lugar de regalar verduras, vayan a vender a la feria"*³¹.

Tal como se expuso al inicio de este apartado, las organizaciones llevaron adelante una serie de movilizaciones previas a los "verdurazos" planteando la problemática y demandando fuertemente al Estado por políticas públicas para el sector, sin embargo, y a pesar de algunas reuniones con funcionarios estatales, no hubo respuestas concretas frente a la situación.

De aquí en más, en los sucesivos verdurazos observaremos cómo se irán sumando otras organizaciones que nuclean y representan a productores familiares de alimentos, no solo de la zona sur del CHB y de la provincia de Buenos Aires, sino también de diferentes provincias del país. Asimismo, se hará referencia –cada vez con mayor insistencia– a las economías regionales, lo cual permitirá visibilizar la "crisis terminal" como problemática que atraviesa pequeños y medianos productores, campesinos, indígenas, trabajadores rurales de todo el país; ampliando y potenciando de esta manera los reclamos hacia el Estado.³²

³⁰ <https://www.arinfo.com.ar/nota/10719/verdurazo-un-reclamo-por-el-acceso-a-la-tierra.htm//>

³¹ <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-309448-2016-09-15.html>

³² Este hecho, puede ilustrarse con otra medida de protesta realizada el 4 de noviembre de 2016. La denominada "Marcha Multisectorial de las Economías Regionales" organizada y convocada por la Federación Nacional Campesina (FNC); el Encuentro Nacional de Naciones y Pueblos Originarios; la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Coordinadora Nacional Campesina Indígena (Vía Campesina);

4.3 Diciembre de 2016: el segundo “Verdurazo”

En diciembre, y por segunda vez, vuelve a realizarse un “verdurazo”, convocado y organizado por la UTT y otras organizaciones que integran la CTEP en el barrio porteño de Constitución, frente a la terminal de trenes de la Línea Roca.

En esta ocasión, y bajo la consigna *“Verdura para el pueblo, ante un modelo de hambre y ajuste”*, un referente de una de las organizaciones sostuvo que a diferencia del “verdurazo” realizado en septiembre *“esta vez decidimos dar una bolsa de 6 kilos con morrones, tomates comunes, tomates cherry, apio, lechuga y acelga y no entregar verduras sueltas”*

Las problemáticas y demandas planteadas fueron las mismas que las expuestas anteriormente: los impactos de las políticas económicas en el sector y la demanda de políticas públicas. Denunciando así la falta de intervención y desregulación estatal en la producción hortícola, al mismo tiempo que la falta de respuestas del Estado nacional y provincial luego de las medidas de protesta realizadas hasta el momento.

En síntesis, a lo largo del 2016, las organizaciones que nuclean y representan a los productores familiares de alimentos del CHB, a través de diversas medidas de protestas y los llamados verdurazos lograron visibilizar sus problemáticas, demandas y propuestas. Podríamos decir también que fueron visibilizándose como sujetos políticos frente al Estado y la sociedad en general. A pesar de ello, y de las mesas de negociación que lograron tener con funcionarios del Estado nacional, provincial y municipal, no

Barrios de Pie, Asociación de Medieros y Afines (Asoma); con el apoyo y participación de Federación Agraria Argentina (FAA), ATE (trabajadores de SENASA, INTA, Agricultura Familiar, entre otros), y numerosas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. Con el propósito de expresar un contenido federal, delegaciones provenientes del NOA, NEA, CUYO, Patagonia, Buenos Aires, marcharon a Plaza de Mayo donde se realizó el acto. En este marco, los productores nucleados en la UTT y ASOMA, entregaron nuevamente verduras y hortalizas a los manifestantes y personas que transitaban por allí. Posteriormente, se dirigieron al Ministerio de Agroindustria a llevar sus reclamos y donde tenían previsto una reunión interministerial. Sin embargo, nuevamente no hubo respuestas concretas por parte del Estado. El comunicado de convocatoria a la misma expresa: “El Gobierno Nacional ha tomado medidas que castigan a la inmensa mayoría del pueblo y socaban los intereses de la nación (...) Se agravan las condiciones de vida, de trabajo y de producción de la mayoría de nuestro pueblo y se ponen en juego los intereses de nuestra patria, con la inflación, los despidos, el ajuste, los tarifazos, las importaciones indiscriminadas, la quiebra de las economías regionales, de las pequeñas y medianas empresas, de la industria nacional y el creciente endeudamiento externo (...) Ante todo ello y como un deber patriótico, impulsamos esta MARCHA MULTISECTORIAL hacia Plaza de Mayo, uniendo a organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y populares (...)” <http://www.pobrerio.com/2016/10/la-argentina-profunda-plaza-de-mayo.html>

lograron respuestas ni soluciones, de hecho podríamos afirmar –como expondremos a continuación–, que se agravan aún más.

El año 2017 comienza con un fuerte temporal sucedido en el mes de febrero que afectó seriamente a los productores del sur del CHB, generando pérdidas de invernáculos, cultivos y viviendas. *“La situación tras los eventos climáticos del 5 de febrero pone en riesgo la producción y el abastecimiento de alimentos frescos a precios accesibles.”*³³ A su vez se quedaron sin electricidad, que como mencionamos, permite la provisión de agua para consumo y riego.

Así, a las problemáticas expuestas reiteradamente, se suma la adversidad climática provocando daños en más del 70% de la producción bajo cubierta en una amplia zona que incluye a Florencio Varela y localidades cercanas a la ciudad de La Plata.³⁴

Ante esta situación de emergencia, las organizaciones³⁵ que nuclean y representan a estos productores, reclamaron apoyo al Estado municipal y provincial para restablecer las condiciones productivas. Específicamente, solicitaron un subsidio de \$ 100.000 para volver a poner en producción al menos un cuarto de hectárea.

Sin embargo, luego de varias reuniones con autoridades municipales y del ministerio de agroindustria, a cada productor solo le fueron entregados dos rollos de nylon y doce maderas con las cuales reconstruir los invernáculos³⁶. Estos materiales permitieron rehacer menos del 10% de lo destruido en las unidades productivas (que tienen en promedio una hectárea)³⁷.

Como se expresa en un artículo del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), a inicios de 2017, el costo del arrendamiento de una hectárea de tierra para

³³ Producción flori-hortícola en el periurbano platense: lo que el viento se llevó. Por Sergio Dumrauf y Guido Prividera En: <http://www.iade.org.ar/noticias/produccion-flori-horticola-en-el-periurbano-platense-lo-que-el-viento-se-llevo>

³⁴ <http://www.iade.org.ar/noticias/produccion-flori-horticola-en-el-periurbano-platense-lo-que-el-viento-se-llevo>

³⁵ Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) – CTEP; Asociación de Medieros y Afines (ASOMA); Mesa Regional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios; Movimiento de Pequeños Productores – CTEP; Frente Agrario Evita – CTEP y el Movimiento Nacional Campesino Indígena – CTEP, entre otras.

³⁶ Propuesta que resulta insuficiente puesto que cada invernáculo lleva, por lo menos, 4 rollos y en sólo una hectárea se extienden unos 20 invernáculos.

³⁷ Esta situación se vio agravada por otros eventos climáticos posteriores que produjeron nuevos daños sin que estas situaciones tuvieran respuesta del Estado local, provincial o nacional. Cabe destacar a su vez que once días después de ocurrido el temporal, los productores continuaban sin suministro eléctrico en sus quintas. Debido a esto las organizaciones se movilizaron a las puertas de EDELAP en reclamo por el restablecimiento del servicio.

producción oscilaba entre los \$3000 y los \$7000. La mayoría de los productores pagaban \$2000 mensuales de electricidad, –que como indicamos, es un insumo fundamental para hacer funcionar las bombas de riego–. La instalación de un invernadero de 70 metros de largo por 7,30 de ancho cuesta aproximadamente \$80.000 sólo en nylon y maderas (sin contar la mano de obra, generalmente aportada por las familias productoras, ni los clavos ni alambres). La bandeja de 200 plantas de tomate tiene un costo de \$1.000; se requieren al menos 2 bandejas por surco. Para la desinfección del suelo el costo de agroquímicos supera los \$10.000.

Como mencionamos anteriormente, los pequeños productores no son sujetos de crédito bancario, por lo cual, para solventar los gastos productivos se endeudan con entidades financieras no bancarias con altísimas tasas de interés.

En palabras de los autores del artículo, *“El debate de fondo son dos modelos de agricultura periurbana: una que privilegia políticas asociadas a una visión de no intervenir en el mercado y por ende, priorizar la ley del más fuerte; otro modelo de agricultura periurbana que necesita de un Estado presente, con una política de planificación de uso del suelo, que asista en la emergencia, acompañe, fortalezca a los agricultores familiares en busca de mejores condiciones de vida y de producción. Sin duda alguna, los resultados de esta puja impactarán en el desarrollo territorial del periurbano y en el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos que poco están informados acerca de las vicisitudes que pasan quienes trabajan para abastecer, intermediarios mediante, la verdulería o supermercado de cada barrio”*

4.4 Abril de 2017: el tercer verdurazo en el marco de una jornada nacional de lucha

En el marco de la *“Jornada nacional de lucha en defensa de los pequeños productores y las economías regionales”* convocada por la CTEP, productores y organizaciones³⁸ de más de 17 provincias, se movilizaron el 25 de abril al ministerio de agroindustria y al mediodía realizaron el “Verdurazo” en plaza de mayo, donde regalaron 40 mil kilos de verduras y hortalizas.

En el comunicado de convocatoria³⁹ se expresa que *“las economías regionales están en situación de emergencia en todo el país. Miles de pequeños productores con riesgo de*

³⁸ Organizaciones que figuran como convocantes: UTT, el [Movimiento de Pequeños Productores](#) (MPP), la rama rural del [Movimiento de Trabajadores Excluidos](#) (MTE), el Frente Agrario Evita, y el [Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina](#) (MNCI-VC) –todas ellas forman parte de la CTEP-, la Federación Nacional Campesina (FNC), Asociación de Medieros y Afines (ASOMA)

³⁹ <http://ctepargentina.org/jornada-nacional-lucha-defensa-los-pequenos-productores-las-economias-regionales/>

dejar la producción”, enfatizando que “el gobierno nacional y los gobernadores no han dado respuesta a esta grave situación”. Aquí se plantea que “la gran mayoría de las economías regionales” hoy están totalmente abandonadas y muchas en quiebra, “No hay ningún estímulo ni ayuda para las Economías Regionales. A lo largo y a lo ancho del país, la horticultura, la lechería, los porcinos, el tabaco, el algodón, la vid, la yerba mate, etc. padecen una crisis que no tiene antecedentes en la historia”.

Se menciona también, que a las problemáticas que vienen denunciando se suman las del temporal de febrero, y los desastres climáticos en gran parte de las provincias, que afectaron seriamente a los productores. Asimismo, manifiestan que para visibilizar dicha situación se han realizado infinidad de movilizaciones y cortes de rutas exigiendo políticas públicas para el sector, pero la respuesta por parte del Estado “ha sido escasa o nula”.

A las demandas expuestas en anteriores movilizaciones, tales como la reglamentación y asignación de presupuesto de la Ley Nº 27.118 de “Reparación histórica para la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (sancionada en 2014); y el avance con el pre proyecto de Ley de Acceso a la tierra (presentado en septiembre de 2016, en el marco del primer “verdurazo”) se suman reclamos por un lado , de créditos blandos accesibles para afrontar las pérdidas ocasionadas por tormentas en muchas provincias del país y para la producción en general, por otro que se sancione una ley de emergencia para las economías regionales.

Refiriéndose a dicha situación y específicamente al “verdurazo”, Carlos Carballo, coordinador de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CALISA-FAUBA), plantea que *“No se está exagerando: la situación es grave y para muchos es terminal, lo que impulsa todas las formas posibles para llamar la atención. El verduras ha sido la más clara, manifiesta y de impacto más masivo, pero la respuesta del sector público no llega”*.⁴⁰

Si bien a través de las distintas medidas de protesta que venimos relatando se da cuenta de la ausencia de políticas públicas para el sector y en esta dirección, la falta de tratamiento de la ley de agricultura familiar, no se había hecho referencia explícitamente hasta este momento de la situación de los diversos organismos estatales

⁴⁰ <http://www.unsam.edu.ar/tss/campesinos-en-emergencia/>

que brindaban importantes apoyos a la “Agricultura Familiar” como la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)⁴¹.

4.5 Octubre de 2017: El “Feriazo de las Economías Regionales”

En un contexto de ajuste y vaciamiento de los principales organismos y programas vinculados al sector, se realiza en octubre el cuarto “verdurazo”, o como lo denominaron las organizaciones “Feriazo de las Economías Regionales”⁴², en Plaza de Mayo, previa movilización al Congreso de la Nación. Cabe destacar que fue una jornada en la cual se replicaron movilizaciones y ferias, de forma simultánea, en las principales plazas de distintas provincias de nuestro país (Mar del Plata, Jujuy, Corrientes, Mendoza y Santa Fe).

Así, alrededor del mediodía, fueron llegando a Plaza de Mayo las organizaciones y productores nucleados en ellas, en camiones y camionetas cargados de cajones de verduras. Los mismos fueron estacionados alrededor de la pirámide de mayo mientras los puestos de ferias, se ubicaron en la arteria principal de la plaza. A lo largo de la jornada –y al igual que en “verdurazos” anteriores–, miles de personas transitaron por allí con bolsas y carritos, en busca de verduras.

Respecto a la particularidad de la medida–realizar ferias–, a diferencia de las anteriores, Agustín Suarez, integrante de la UTT, mencionó que *“La idea surgió en respuesta al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que en ocasión del primer verduras que hicimos el año pasado, declaró que en lugar de regalar verdura en Plaza de Mayo fuéramos a vender a la feria”*⁴³.

En este sentido, y a diferencia de los anteriores “verdurazos” en los cuales entregaban verduras y hortalizas gratuitamente, en esta ocasión vendieron los productos al precio que les pagan en las quintas.

⁴¹ <http://elenfiteuta.com/1701181-2017-agricultura-familiar/>

⁴² medida que nuevamente fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con apoyo de numerosas organizaciones de pequeños productores y campesinas: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Federación Nacional Campesina (FNC), el Frente Agrario Evita, Frente Agropecuario Regional Campesino (FARC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). <http://www.eleconomista.com.ar/2017-10-feriazo-reclamo-los-agricultores-familiares/>

⁴³ <http://www.eleconomista.com.ar/2017-10-feriazo-reclamo-los-agricultores-familiares>

Al igual que en las medidas previas, en las cuales fue señalado de forma constante/reiterativa como uno de los problemas claves del sector (por las organizaciones y los medios de comunicación), nuevamente aquí –y con mayor énfasis– cobró protagonismo la problemática de la comercialización, haciendo alusión a la diferencia entre lo que se le paga a los productores en las quintas y los precios “excesivos” que el ciudadano paga en verdulerías y supermercados.

Si bien dicha problemática cobró protagonismo, no dejaron de mencionarse en esta ocasión demandas planteadas en anteriores movilizaciones, a las cuales se suma fuertemente la denuncia por el desfinanciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), el congelamiento del Monotributo Social Agropecuario (MSA) y el Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF) y las modificaciones en programa Cambio Rural II ⁴⁴. En el mismo plano ubicaron la falta de avance en el tratamiento de la ley de acceso a la tierra y de la ley de agricultura familiar.

En esta situación se llega a fin de año. Con una fuerte devaluación, con un proceso inflacionario en alza y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios; con continuos aumentos en las tarifas de servicios públicos. En este contexto y en medio de manifestaciones masivas de repudio –represión mediante–, el 19 de diciembre a la madrugada, se aprueba la Ley de reforma previsional⁴⁵.

4.6 Diciembre de 2017: “Verdurazo por los Jubilados”

Tras su aprobación, un “verdurazo”⁴⁶ vuelve a repetirse el miércoles 27 de diciembre, esta vez en beneficio de los jubilados afectados por el recorte.

La protesta, entonces, tuvo un doble objetivo: continuar visibilizando los problemas del sector, al mismo tiempo que repudiar la aprobación de la ley de reforma previsional.

⁴⁴ Haremos referencia a la SAF, MSA, RENAF y Cambio Rural II en el siguiente apartado.

⁴⁵ <http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/12/18/argentina-informe-cifra-cta-por-que-rechazamos-la-reforma-previsional/>

⁴⁶ convocado por la UTT-CTEP y realizados en Capital Federal, frente al Congreso Nacional, y en Mar del Plata, frente a la catedral

<https://www.pagina12.com.ar/85343-un-verdurazo-para-ayudar-a-los-jubilados>

<https://www.pagina12.com.ar/85492-un-verdurazo-en-el-congreso>

<https://radiocut.fm/audiocut/verdurazo-por-los-jubilados-en-plaza-de-los-dos-congresos/>

Así, los pequeños productores nucleados en la UTT, repartieron gratuitamente 20 mil kilos de verduras en lo que llamaron “Verdurazo por los jubilados” para “ayudarlos a pasar fin de año”.

Referentes de la organización explicitaron que, al aprobado ajuste de las jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo se suma la reducción de las retenciones a la exportación de la soja, beneficiando así a las economías concentradas, mientras se agrava la crisis de los pequeños productores. *“El Gobierno pactó con el agronegocio una reducción del 6 por ciento en las retenciones para el 2018, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares menos de recaudación para el Estado. Una transferencia directa para las economías más concentradas en detrimento del sector de la agricultura familiar”*. Asimismo plantean que *“Se les quita a los jubilados, no hay políticas públicas para los pequeños productores pero por otro lado se les entrega más dinero a los que más tienen con la quita de retenciones... es el reino del revés”*.

Volvieron a remarcar nuevamente que desde el Ministerio de Agroindustria ni siquiera los reciben. *“Nos mandan a hablar a Desarrollo Social porque dicen que Agroindustria no es lugar para discutir esas cosas”*.

De esta manera el año 2017, cierra con las condiciones socioeconómicas que fuimos reflejando intactas, en relación al proceso devaluatorio e inflacionario que venía atravesando el país. En este sentido, los insumos, el alquiler de la tierra y las tarifas de los servicios públicos continuaron aumentando constantemente para los productores, mientras sus ingresos aumentaron en menor proporción que los costos productivos.

4.7 Abril de 2018: “Verdurazo con acampe”

Por último, la profundización de las políticas macroeconómicas que llevó adelante el gobierno–acuerdo con del FMI mediante– a lo largo del año 2018, no hicieron más que acentuar la situación de crisis social y económica de nuestro país.

De esta manera, el 17, 18 y 19 de abril de 2018, se realizó en la Plaza de los dos Congresos, el denominado “Verdurazo con Acampe”, organizado nuevamente por la UTT-CTEP. A lo largo de los tres días fueron entregados aproximadamente 30 mil kilos de verduras. Cabe destacar que la medida se llevó adelante en más de 16 provincias⁴⁷.

⁴⁷ Por ejemplo, en Jujuy se hizo una movilización, al igual que en Corrientes. En Santiago del Estero, Santa Fé y Salta se convocó a una radio abierta y a 'feriazos', y a concentraciones en municipios y en delegaciones de la Secretaria de Agricultura Familiar en Misiones, Chaco, Mendoza, Chubut, Río Negro y en ciudades del sur de Buenos Aires como Bahía Blanca y Mar del Plata, donde también se realizó un "verdurazo".

Los motivos fueron continuar visibilizando las problemáticas del sector, pero principalmente para acompañar e impulsar nuevamente el proyecto de Ley de Acceso a la tierra (recordemos que el mismo había sido presentado en septiembre de 2016 en el marco del primer “verdurazo”)⁴⁸. En este sentido, el miércoles 18 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, la UTT convocó a realizar una audiencia pública para explicar el proyecto.⁴⁹

En relación a la particularidad de la medida (verdurazo con acampe a lo largo de tres días) referentes de la UTT manifestaron que tras la realización de los “verdurazos” y “feriazos” de 2016 y 2017 donde expusieron las problemáticas del sector, no tuvieron ninguna respuesta por parte del gobierno ni de los legisladores. Plantean que *“Frente a esa indiferencia decidimos radicalizar la acción del verduras con un acampe en Plaza Congreso, para intentar poner en agenda la necesidad que tenemos los pequeños productores de acceder a un crédito para comprar nuestra propia tierra. Hoy, la situación del agricultor familiar es insostenible. Los precios de los servicios no dejan de subir y lo que se paga por la verdura, los huevos, la carne de cerdo, el queso de campo y la miel, entre otros productos, no alcanza muchas veces a cubrir los costos de producción”* (el subrayado es nuestro).⁵⁰

4.8 Los “Feriazos”

Si bien el marco temporal en nuestro trabajo abarca de diciembre de 2015 a abril de 2018, quisiéramos señalar que posterior al “verdurazo con acampe”, se realizaron otros verdurazos y posteriormente se fueron sucediendo y consolidando los “feriazos”, organizados e impulsados por la UTT en plazas centrales de la Ciudad de Buenos Aires.

⁴⁸ El texto completo del Proyecto de ley (D-883/2018): CREACION DEL FONDO FIDUCIARIO PUBLICO DE CREDITO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR- CREAM se encuentra en: <http://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/category/comunicacion/>

⁴⁹ Dos semanas antes, el 5 de abril, integrantes de la organización entregaron 5 kg de verdura a cada diputado de la Nación con el fin de convocar a la audiencia. Agustín Suárez comenta que “Hace dos semanas que nos dimos la tarea de recorrer los distintos despachos de los diputados. Realizamos un “verdurazo” parlamentario, donde regalamos un bolsón de verdura a cada diputado, comprometiéndolos a que pongan en agenda el proyecto de ley y convocándolos a una audiencia pública que se hará este miércoles en el Congreso, donde se explicará en qué consiste nuestro proyecto y donde se sumarán propuestas. En general, la propuesta fue bien recibida por la mayoría de los diputados y bloques.” (el subrayado es nuestro)

⁵⁰ A pesar de las reiteradas medidas llevadas adelante por las organizaciones, el proyecto de ley nunca fue tratado.

–Retiro, Constitución, Once, Plaza de Mayo–y en plazas centrales de distintas provincias y ciudades. con días y horarios estipulados, y con precios sumamente económicos de verduras y hortalizas.

A partir de ellos, continuaron visibilizándose las problemáticas y demandas expuestas anteriormente. En lo que refiere al proyecto de ley de acceso a la tierra impulsado por la UTT el Feriado correspondiente al 20 de septiembre–que se llevó a cabo en las plazas mencionadas a lo largo de tres días–, fue el marco desde el cual algunos diputados, presentaron una nota en la Comisión de Agricultura para solicitar su tratamiento. Hasta donde tenemos información, dicho proyecto nunca fue tratado, así como tampoco lo fueron las demandas expuestas a lo largo de esos tres años.

5. POLÍTICAS ESTATALES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR. TRANSFORMACIÓN Y DESFINANCIAMIENTO ENTRE LOS AÑOS 2016 Y 2018

Como referimos en el apartado anterior, en el transcurso de los meses posteriores al tercer “verdurazo”, se llevaron adelante transformaciones significativas y desfinanciamiento de la SAF y el INTA y programas específicos vinculados al sector de la agricultura familiar.

La Secretaría trabajaba en distintos lineamientos desde dos Subsecretarías. Por un lado, la Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar, incluyendo las Direcciones de Identificación y Formalización de los Agricultores Familiares y de Programas y Proyectos para la Agricultura Familiar; y por otro la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, con la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de Agricultura Familiar. Recordemos que la creación de este organismo significó un reconocimiento para las formas organizativas y productivas familiares y territoriales de base, sector troncal en la producción de alimentos en nuestro país, y también se involucró en los conflictos por tenencia de tierras.

En ese contexto se logró construir un Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF)⁵¹. Desde el mismo, pudo establecerse que a lo largo del territorio nacional existen 333.477 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) de las cuales el 66% son de pequeños productores que se dedican principalmente a la agricultura y cría de animales,

⁵¹ A partir de la inscripción en dicho registro, los productores obtienen una certificación de su actividad que permite entre otras cosas acceder a programas y proyectos, como por ejemplo el Monotributo Social Agropecuario al que nos referiremos más adelante.

según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2002.⁵² (Informe CESO, febrero 2016)

A su vez, –como mencionamos en párrafos anteriores–, en diciembre de 2014 el Parlamento Nacional aprobó la Ley de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Para la Construcción de Una Nueva Ruralidad en Argentina” (que aún no fue reglamentada por el Ejecutivo Nacional) y se creó el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El mismo era una instancia que nucleaba organizaciones nacionales –de segundo grado– que representan al sector y distintas instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario. Desde este espacio se articulaban políticas en función de las necesidades de las organizaciones.

Estos avances no solucionaron todos los problemas del sector, pero plantearon canales de diálogo directo entre sus actores y el Estado, pudiéndose avanzar en necesidades concretas como asistencia técnica, acceso a financiamiento, creación de espacios de comercialización, entre otras cuestiones (Informe CESO, Febrero 2016).

Ahora bien, desde inicios de 2016, el Ministerio de Agroindustria⁵³ dejó paralizada a la SAF, escasa de presupuesto y con falta de recursos para implementar políticas públicas destinadas al sector. Las primeras decisiones políticas conllevaron el cierre de la Delegación AMBA de la Secretaría de Agricultura Familiar (núcleo central de la producción de alimentos para la Ciudad de Buenos Aires), el desmantelamiento de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y los despidos a trabajadores de la Secretaría en Jujuy. Posteriormente se fueron paralizando otras sedes regionales y recortando personal.

En un encuentro realizado en marzo de 2016⁵⁴ por la Cátedra libre de estudios Agrarios “Ing. Agr. Horacio Giberti” se hace referencia a que las autoridades designadas para la Agricultura familiar F “han criticado la presencia de muchos técnicos en la SAF que provienen de las ciencias sociales, revelando un sesgo productivista, cuyo origen hay que buscarlo en los funcionarios y asesores que pusieron los grupo CREA” (Revista Realidad Económica, 2016).

⁵² También sabemos que la realidad del sector no permite establecer un cierre definitivo del registro.

⁵³ Resulta significativo también el cambio de nombre de la cartera que pasó de llamarse “Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca” a “Ministerio de Agroindustria”, otro indicio de los sectores que se verían privilegiados con las políticas llevadas adelante por la alianza “Cambiemos”.

⁵⁴ El objetivo del mismo fue la actualización de diagnóstico con el objeto de analizar los impactos que hasta ese entonces se estaban registrando sobre las cadenas productivas y actores sociales a partir de la política económica del gobierno desde diciembre de 2015.

También informan que, desde los funcionarios de la SAF, ya en ese entonces, estaba presente la idea de poner énfasis nuevamente en aquellas explotaciones que *“tengan capacidad productiva en el marco de la competitividad del mercado”*. Estos funcionarios sostienen que es un diseño para ingenieros agrónomos, zootecnistas o veterinarios donde la línea social (sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, etc.) pierde valor relativo. *“(…) La mirada de la agricultura familiar como unidad productiva se instala en esta perspectiva de análisis”* ((Revista Realidad Económica, 2016:).

En términos institucionales, el 2017 comenzó con una SAF acéfala. El secretario designado al inicio de la gestión del actual gobierno, Oscar Alloati, renunció en octubre de 2016⁵⁵.

En mayo de 2017, a partir del decreto 302/17⁵⁶, la SAF fue disminuida de rango y fusionada a la Secretaría de coordinación y desarrollo territorial, a cargo de Santiago Hardi⁵⁷, eliminando así su autonomía. Meses posteriores a dicho decreto asume como titular de la ahora Subsecretaria de Agricultura Familiar y desarrollo territorial, Juan Manuel Pomar, que renunciaría los últimos días del año.⁵⁸

Respecto a las inscripciones al Monotributo Social Agropecuario (MSA) y las reactualizaciones del RENAF –dependientes de la SAF–, a lo largo del año 2017 estuvieron marcadas por muchas dificultades. En palabras de Diego Montón, referente del MNCI-VC de la región de Cuyo, *“la Secretaría de Agricultura Familiar también está desfinanciada, no hay acceso a créditos o subsidios para infraestructura como había hasta 2015, y se viene haciendo una reactualización del RENAF, que entre otras cosas permite tener un monotributo social agropecuario y una obra social, pero están poniendo muchísimas trabas para que las familias lo sigan teniendo”*⁵⁹.

⁵⁵ Por lo que puede rastrearse en diversas notas periodísticas, las razones de su renuncia se vinculan con la negativa a aplicar los recortes del 30% de personal que se le exigía, a la falta de recursos para implementar políticas destinadas al sector y a su descontento con los primeros despidos del área.

⁵⁶ <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/162993/20170502>

⁵⁷ Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1993 participa en la gestión pública. Fue gerente y director en distintas empresas del sector privado. Gerente General en Fundación Pensar.

⁵⁸ En el organigrama de la página oficial del ministerio de agroindustria figuraba en el cargo de subsecretario Felipe Crespo Productor Agropecuario y Empresario de Turismo Rural. Desde 1987 participa en la gestión pública. Miembro de la Fundación Pensar participando en equipos de Políticas Públicas y Sociales.

⁵⁹ <http://www.unsam.edu.ar/tss/pequenos-productores-a-la-intemperie/>

Respecto al Monotributo Social Agropecuario, el mismo fue creado en el año 2009, como extensión del Monotributo Social⁶⁰, con el objetivo de regularizar la situación laboral de “agricultores familiares, campesinos e indígenas”⁶¹, contar con una obra social, acceder al sistema de previsión social y tener la posibilidad de facturar.

Asimismo, en el año 2010 se pone en marcha el Monotributo Social Costo Cero (cobertura 100% del estado) que funcionó para los tomadores de microcrédito y los asociadxs en las Cooperativas del por aquel entonces programa Argentina Trabaja, lo cual se extiende Monotributo Social Agropecuario, subsidiado por la entonces Subsecretaría Agricultura Familiar –que posteriormente alcanzó rango de Secretaría– (Feser et al; 2012: 172-176; Gandulfo; 2018⁶²). Como veremos hacia el final de este apartado y en mayor detalle, en julio del 2018, el Ministerio de Agroindustria de la Nación emite un comunicado a través de la página oficial, anunciando la eliminación del MSA.

En relación al INTA, también en este organismo se observa el ajuste llevado adelante por el gobierno, al mismo tiempo que vuelve paulatinamente a su política tradicional relacionada con los grandes productores.

Al respecto, en octubre de 2016, una trabajadora de dicho organismo⁶³ nos comentaba que si bien en el INTA –hasta ese momento– no había habido despidos como en otros organismos y ministerios, *“desde este año se empezó a ver que no hay plata, que el presupuesto que estaba destinado al primer trimestre, venía nada más que el treinta por ciento (...) se empezó a recortar presupuesto, o que en vez de dártelo en un momento te lo dan después y vos no podés planificar tus actividades, no podés planificar el laburo”*. En este sentido explicita que *“no hay plata para reunirse, entonces tratás de hacer actividades que sean de bajo presupuesto, eso se empezó a ver (...) decís bueno mejor no*

⁶⁰ El Monotributo Social posibilita a los trabajadores y trabajadoras disponer de un régimen de contribución simplificado que les permite poder facturar sobre su trabajo y producción, utilizar una obra social y acceder al sistema de previsión social. Específicamente, el Estado asume el pago correspondiente a jubilación, el impuesto y la mitad de la obra social, por lo cual el trabajador o trabajadora solo debe pagar un 25% -correspondiente a la otra mitad de la obra social- (Feser et al; 2012: 172-176; Gandulfo; 2018)

⁶¹ Categorías en las que se incluyen como principales destinatarios de la política, pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores, ganaderos de muy baja escala, entre otros.

⁶² ¿Hasta cuándo? En: <http://www.iade.org.ar/noticias/hasta-cuando>

⁶³ Entrevista realizada en octubre de 2016 a una trabajadora del INTA en el marco de un seminario con Prácticas Socio Educativas de la Facultad de Filosofía y Letras cuyo objeto fue relevar las transformaciones que hasta ese momento estaban ocurriendo en las políticas públicas referidas a lo que consideramos “Economía Popular”.

me comprometo con tal cosa porque después no voy a poder pagarlo, como que te empieza a paralizar un poco el laburo”.

Nos menciona que hay una disputa al interior del INTA entre la orientación más tradicionalista, mencionada anteriormente, y una nueva concepción que comienza a estar presente desde los años 2005/2006; en palabras de ella, desde esos años *“empezó a haber una apertura (...) se le empezó a dar más lugar al trabajo con agricultura familiar, con la cuestión más social y territorial (...) y con una propuesta agroecológica”*; y aclara que es esta concepción la que ahora entra en disputa con las nuevas autoridades *“porque todo eso que se había conquistado, ahora las nuevas autoridades, que están en el INTA, una viene de la sociedad rural, el otro viene del grupo CREA, y ya nos miran con lupa, es como que vuelve la idea de que con esto en el INTA ¡no!, ¡¿por qué el INTA tiene que trabajar con estos chiquitajes, con la agroecología?! ¡eso no es ciencia! (...) y así te empiezan a deslegitimar (...) tuvimos una auditoría, a principio de año, y a mí me hicieron una entrevista y básicamente me preguntaban por qué el INTA tenía que trabajar en lo social si en realidad eso le toca a otros ministerios (...)”*.

Respecto al programa Cambio Rural II⁶⁴, menciona que *“se abrió hace dos años, y se armaron un montón de grupos [que] ahora están viendo cómo dar de baja, entonces hay toda una serie de presiones y monitoreo y si no llenaste la planillita de no sé qué ¡de baja!, eso es lo que está pasando ahora, grupos muy buenos que laburaban súper bien, porque no llenó el informe de no sé qué, los están dando de baja, eso es porque quieren ajustar, ajustar, ajustar (...) es como un panorama oscuro”*

En línea con lo que mencionó la entrevistada, desde mediados de 2016 a septiembre de 2017, se dieron de baja entre 800 y 1.000 grupos del programa que brindaba asistencia técnica y capacitaciones a pequeños productores, con el consecuente despido de técnicos asesores del mismo. Muchos de las familias productoras que integraban estos grupos fueron incluidas en Grupos de Abastecimiento Local (GAL), línea de acción del Programa Pro-huerta, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y gestionado por el INTA⁶⁵. Un aspecto interesante vinculado a este traspaso,(y que analizaremos con más detalle al finalizar este apartado), es cómo desde el Estado comienzan a concebirse los pequeños productores o la agricultura familiar, como un

⁶⁴ “Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria” (Cambio Rural II) INTA/Ministerio de Agricultura.

⁶⁵ <https://inta.gob.ar/noticias/apoyo-a-los-grupos-de-abastecimiento-local-ministerio-de-desarrollo-social-de-la-nacion-inta>
<https://inta.gob.ar/noticias/grupos-de-abastecimiento-local-gal>

sector al que se debe asistir y no como sujeto activo y productor de alimentos para la población.

Asimismo, el 6 de septiembre de 2017 el Ministerio de Agroindustria publicó en el boletín oficial la resolución 249-E/2017⁶⁶ que anuncia la “reestructuración” del programa, aprobando el nuevo manual operativo del mismo, con modificaciones que excluirán a la mayoría de los pequeños productores. Es que uno de los requisitos de la nueva normativa para acceder al programa es *“Ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”*. Tal como nos explicitó la trabajadora del INTA entrevistada, *“el sujeto hortícola más importante del AMBA, es el boliviano migrante, que vino hace veinte años y que sigue viniendo y hoy es el ochenta por ciento de lo que es la producción en quinta y que tienen todo tipo de problemáticas (...) de vivienda, de comercialización, productivas, entonces como que se trabaja mucho con ese sector, algo que se está dando mucho es el trabajo con la agroecología es un problema para ellos todos los costos del modelo dominante, hace que tengas que gastar mucha plata en insumos, químicos, todo...para que te rinda la producción, es todo una cadena”*.

Entre las justificaciones de la nueva norma se considera que *“luego de sus más de veinte (20) años de existencia, el Programa ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción”* y que, *“como consecuencia, a pesar del esfuerzo empleado y recursos invertidos, los resultados obtenidos no alcanzan para posicionar a la pequeña y mediana empresa rural en los niveles óptimos y necesarios de eficiencia productiva que les permitan enfrentar exitosamente las fluctuaciones económicas y climáticas.”*

El geógrafo Andrés Barsky⁶⁷, plantea que *“Es clarísimo que apunta a los productores bolivianos”*; y sostiene que *“Hacer un diagnóstico diciendo que el programa se desvirtuó es imponer la idea de que la agricultura familiar no merece ser alcanzada por este tipo de programas. En la concepción del Gobierno actual, la producción familiar es de tan baja escala que no merece ser contemplada dentro de las políticas del Ministerio de Agroindustria, sino que tienen que entrar dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Aparece el concepto de ayuda y entonces Agroindustria no tiene que ocuparse de ellos, sino orientarse a las grandes agriculturas vinculadas con los cultivos que el país exporta, como soja, trigo, maíz y girasol”*. Sin embargo, como detallamos al inicio son

⁶⁶ <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/170449/20170911>

⁶⁷ Coordinador de investigación en el [Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento](#). Investiga temas vinculados con el ordenamiento territorial periurbano y el avance de la ciudad sobre zonas productivas.

los agricultores familiares que rodean los sectores urbanos y periurbanos los que producen una parte importante de los alimentos que llegan a diario a la mesa de todos los habitantes del país.

Para Nahuel Levaggi, referente de la UTT-CTEP, “es un cambio de política que institucionaliza la discriminación”. Por eso, tras conocer la resolución publicada en el Boletín Oficial, la UTT-CTEP presentó una denuncia en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI).

Tras la denuncia de la UTT, el coordinador nacional de Cambio Rural manifestó no estar al tanto de lo publicado en el Boletín Oficial, que “fue un error” y que trataría de corregirlo⁶⁸. Levaggi dijo que dialogaron con algunos funcionarios del Ministerio de Agroindustria y se mostraron sorprendidos. *“Decían que no sabían, que no se dieron cuenta y que iban a ver de qué se trataba porque no tenían presente ese requisito”.* (Diario La Nación).

Entre los meses de abril y julio de 2018, continuaron los despidos de trabajadores en la SAF, SENASA, INTI y el vaciamiento y paralización de estos organismos; aumentaron los casos de violencia institucional contra referentes y familias productoras de la UTT y otras organizaciones⁶⁹ y el 29 de junio se comunicó la eliminación del MSA.

Frente a ello, nuevos “verdurazos” se llevaron adelante por la UTT, uno de los cuales fue realizado frente a la Sociedad Rural. Posteriormente, como indicamos en el apartado anterior, fueron consolidándose los Feriazos.

⁶⁸ Actualmente en el manual operativo sigue figurando ese requisito.

⁶⁹ Por ejemplo, en el mes de abril, en el marco de un reclamo de tierras en el que unas 100 familias agrícolas de la UTT realizaban una asamblea en la vía pública para discutir de qué manera llevaban su reclamo a La Plata, la Policía Bonaerense e Infantería irrumpieron la reunión. Amenazaron, insultaron y golpearon a quienes estaban participando e, incluso, pincharon las gomas de los vehículos que se encontraban en el sitio. A dos mujeres y un hombre los llevaron detenidos ilegalmente, con la acusación de haberse resistido a la autoridad. Estuvieron todo el tiempo esposados, sin comer y apenas le dieron de tomar agua una vez. A las mujeres las obligaron a desnudarse frente a policías varones. Pasaron más de 24hs detenidos en la comisaría de olmos. Los tres miembros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, presentaron la denuncia en el Juzgado de Garantías N°3 por apremios ilegales, discriminación y otros tipos de abusos por parte de la Policía Bonaerense. <http://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/2018/05/30/agricultores-de-la-utt-denunciaron-abusos-de-la-policia-bonaerense/>

En junio, en el marco de un “tractorazo” realizado familias productoras nucleadas en la UTT, que se dirigían a la municipalidad de Florencio Varela, para reclamarle al intendente Andrés Watson mejoras para los caminos rurales y ayuda para la emergencia agropecuaria, Nahuel Levaggi -coordinador nacional de la UTT- y Juan Ruiz -referente de la UTT- fueron golpeados y detenidos. Además de las detenciones hubo heridos y la policía golpeó a mujeres que llevaban niños en brazos. <http://www.anred.org/?p=97323>

Respecto al MSA, como mencionamos anteriormente, desde mediados de 2017 comenzaron los problemas para acceder al mismo. Referentes de las organizaciones venían manifestando que el MSA había perdido operatividad. En palabras de Agustín Suárez, integrante de la UTT *“(…) no es que no exista más, porque los que estaban adentro siguen aportando como tales, pero a los nuevos pequeños agricultores no se los incorpora, sin que nadie dé una explicación”*

Ante esta situación, desde la UTT presentaron un amparo⁷⁰ para que el Ministerio de Agroindustria, abra nuevas inscripciones al MSA ya que *“actualmente es la única herramienta que regulariza la actividad del agricultor familiar, además de brindarle derechos, como una obra social y aportes jubilatorios. Este siempre fue un sector condenado a la informalidad, a que toda su cadena de producción fuera en negro, con los perjuicios que ello conlleva”*⁷¹.

La respuesta estatal frente a ello fue la eliminación completa del beneficio a los cuatro días de haber presentado aquel amparo.

El Ministerio de agroindustria de la Nación, mediante la emisión de un comunicado⁷², dispuso que entre julio y agosto de 2018 *“todos los actuales beneficiarios deben reempadronarse. Quienes lo hagan conservarán el beneficio actual”*⁷³, de manera gratuita, hasta fin de año”. Asimismo, se indica que a partir del 1 de enero de 2019 los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen “. Sin dar mayores detalles, se expresa que

⁷⁰ Francisco Alberto Caputo, asesor legal de la UTT, explicó que el amparo se presenta por *“la violación de la garantía del derecho de trabajar, al no permitir ingresar en la economía formal; afectándose también el derecho a la salud, por impedir el acceso a la obra social para el agricultor y su familia; el derecho a la salud de la niñez, y también el derecho a la seguridad social, por los aportes no hechos”*. Agregó que el amparo se encuentra sustentado en normas constitucionales y en tratados internacionales con raigambre constitucional. *“El objetivo es conseguir una medida cautelar que ordene una inscripción preventiva para las personas que intentan la demanda y el objetivo final es tener una sentencia que reestablezca los derechos”*,

⁷¹ Agustín Suárez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). En <https://www.pagina12.com.ar/125113-la-tijera-les-llego-a-los-pequenos-productores>

⁷² <https://www.argentina.gob.ar/monotributo-social-agropecuario>
<https://www.argentina.gob.ar/noticias/actualizacion-de-datos-del-monotributo-social-agropecuario>

⁷³ Recordemos que, como dijimos previamente, el MSA tenía costo cero para los “agricultores familiares” incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf).

el objetivo de esta decisión es *“fortalecer la transparencia y la organización en todas las cadenas de valor”*.

De esta manera, con la eliminación del MSA, el productor/ra deberá pagar el 25% restante del impuesto, más el aporte a la obra social por cada miembro de la familia. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Diego Montón declaró *“Lo que ocurre con el MSA es otra muestra de que desde el Estado se tiende a estigmatizar la agricultura familiar, campesina e indígena para presentarla como una actividad inviable y así derivarnos directamente a planes de asistencia, excluyéndonos de las políticas públicas dependientes del Ministerio de Agroindustria”*. Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, plantea sobre el MSA *“Creo que hay políticas públicas con mayor eficiencia que está”*.

Como se puede observar a lo largo de este apartado, la puesta en agenda pública de la problemática implicó disputas de sentido en torno a las posibles respuestas del Estado. Mientras las organizaciones reclamaban ser reconocidos como parte del sistema productivo los funcionarios del gobierno nacional los consideraban y ubicaban como sujetos de asistencia. Asimismo, vemos como se avanzó en el desfinanciamiento de los organismos mencionados y en la transformación de los diversos programas destinados al sector. Lo que se observa es que se trata de volver a una política centralizada y tecnocrática, ligada al modelo agroexportador, donde no se produce para el mercado interno sino para la exportación, y sus actores son los grandes productores. Estas medidas se encuentran en línea con la quita de retenciones, megadevaluación, el cierre del Renatea entre otras. (Informe CESO, 2016)

6. REFLEXIONES FINALES

A lo largo de nuestro trabajo intentamos dar cuenta del proceso por el cual las demandas de los pequeños productores del CHB nucleados en organizaciones que los representan –específicamente la UTT– lograron conformarse como problemas sociales o cuestiones a partir de los verdurazos y feriazos. Formas de protesta llevadas adelante frente al impacto de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de la alianza Cambiemos y las transformaciones de políticas estatales para el sector entre los años 2016 y 2018.

Como mencionamos en el apartado 2.2 el gobierno comenzó a implementar una serie de políticas macroeconómicas que implicaron una fuerte transferencias de ingresos a

los sectores concentrados: devaluación, la liberalización del precio del combustible, el aumento de las tarifas de los servicios públicos; la apertura del mercado externo, la baja de retenciones al sector agroexportador, entre otras. Todo ello, significó el aumento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el achicamiento del mercado interno.

Estas políticas impactaron gravemente en la producción y comercialización de los productores hortícolas del CHB. Frente a ello, los verdurazos y feriazos descritos en este trabajo, fueron las acciones políticas que lograron colocar las demandas del sector en la agenda pública visibilizando las problemáticas vinculadas al acceso a la tierra y al crédito, a la distribución del ingreso en la cadena de producción y comercialización de alimentos, reglamentación y asignación de la Ley N° 27.118 de “Reparación Histórica para la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la argentina”.

Retomando la pregunta que nos hicimos al inicio ¿por qué los “verdurazos” y “feriazos” cobraron mayor resonancia y visibilidad, siendo que con anterioridad estas mismas organizaciones llevaron adelante otras medidas de acción, manifestando problemáticas y demandas similares hacia el Estado –nacional, provincial, municipal–?, Consideramos puede vincularse con la llegada a gran cantidad de personas debido a la cobertura de los medios de comunicación televisivos, radiales, gráficos, redes sociales.; a su vez porque involucraron e interpelaron, a partir de la entrega de hortalizas y frutas, a ciertos sectores de la sociedad en un momento de crisis económica y social muy acentuada, y porque resultaron ser sostenidas en el tiempo, a lo largo de cuatro años, no solo en CABA y AMBA sino en distintas provincias de nuestro país.

Lo que observamos a lo largo de la entrada en agenda pública de la problemática es que la misma se enmarca en un fuerte proceso organizativo que los productores del Cinturón Hortícola Bonaerense se han dado en los últimos años. Consideramos que dicho proceso ha posibilitado no sólo desplegar estrategias de resistencia sostenida en el tiempo frente al avance del neoliberalismo, sino que han permitido visibilizar a estas organizaciones como sujetos políticos, es decir permite situarlos en la disputa política, que no es otra que la disputa capital-trabajo.

En esa clave, algunos interrogantes que surgen a partir del desarrollo de nuestra monografía y que quedaran pendientes de problematizar refieren a una pregunta recurrente: ¿qué hay detrás de lo que tanto las organizaciones como los medios de comunicación llaman reiteradamente la “cadena de comercialización” y las diferencias entre “las puntas”: el productor, al cual le pagan un precio ínfimo por lo que produce, y

el “vecino” que paga un precio elevado por esos productos en las verdulerías y supermercados?

Sostenemos entonces la centralidad del sujeto trabajador porque *“los sujetos que luchan no se posicionan desde una subjetividad derrotada sino desde la necesidad de una organización distinta. Y esa lucha nos habla (...) de la capacidad constitutiva y demandante de la clase, nos habla de cómo los intereses materiales de los trabajadores se traducen en objetivos políticos presente en tramas políticas locales, alineamientos políticos nacionales, y en dinámicas relaciones que asume la política entre los niveles nacional, provincial y local, según las distintas coyunturas”* (Petz, Ivanna; 2010:100) .

Considerando esas tramas, en este trabajo dimos cuenta de las respuestas estatales entre 2016 y 2018. En diciembre de 2019, a partir de la asunción del gobierno de la alianza Frente de Todxs, se abren nuevos escenarios. ¿En qué medida los verdurazos y ferizados sostenidos a lo largo de cuatro años influyeron para que hoy desde el Estado se los considere como interlocutores válidos a la hora de caracterizar las problemáticas del sector y pensar propuestas para su resolución?

Es que desde que asumió el actual gobierno, se convocó desde el poder ejecutivo nacional a referentes de la UTT a participar del Consejo Social y Económico a inicios de 2020 poco tiempo después de que se designara a Nahuel Levaggi (referente de la UTT) como presidente del Mercado Central de Buenos Aires, entre otras cuestiones significativas. A su vez, la SAF volvió al rango que tenía anteriormente al gobierno alianza cambiamos, se restableció el Monotributo Social Agropecuario y se puso en marcha el Registro Nacional de Agricultura Familiar.

A su vez, a lo largo de este año y medio atravesado por la pandemia COVID 19, se instala el tema de la agroecología vinculada a la alimentación sana y aumentaron los nodos de consumo, etc. Una cuestión significativa es que la UTT tiene una sección en el programa Cocineros Argentinos de la Televisión Pública, en la cual muestran cómo se producen determinadas verduras en las quintas que luego le cocinere utiliza en una receta. Pensamos que los verdurazos y ferizados, funcionaron como una interpelación efectiva a otros sectores sociales que hizo posible instalar estos temas en la disputa de sentidos en algo tan cotidiano como la cocina y las compras de alimentos.

Entendemos que hubo una decisión política de interpelar a otros sectores para fortalecer la propia lucha y eso implicó nuevas estrategias comunicativas, encontrar los puntos en común que pudieran generar nuevos sentidos compartidos, alianzas y simpatías.

Para concluir, compartimos con Trincherio (1994,2000,2007) que *“los sujetos existen socialmente en tanto configuraciones resultantes de una serie de relaciones históricas, institucionales, estructurales y cotidianas que, al incluirlos, los instalan en la escena pública, los hacen visibles socialmente”*.

Bibliografía

-ARGUMEDO, A (1993) Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires

-BALAZOTE, A y HOCKSMAN, L (2013). Conflictividad Agraria y defensa del territorio campesino-indígena en América Latina. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

-CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS AGRARIOS “ING. AGR. HORACIO GIBERTI”. Reunión-taller. Actualización de diagnósticos: impacto de la nueva política económica en los actores sociales de las cadenas agropecuarias. En: Realidad Económica N° 299: Trabajo Nacional. Superar el espanto, pp. 104-126. Ed. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Buenos Aires. 2016

-Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El impacto negativo de las políticas económicas en la vigencia de los derechos económicos y sociales. En: Derechos Humanos en la Argentina: Informe 2017. Cap 1 pp. 23-47. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires. 2017. Edición digital en <https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/derechos-humanos-en-la-argentina-informe-2017/>

-CENTRO DE ESTUDIOS SCALABRINI ORTIZ (2014) “Informe de la Economía popular Nro. I: Producción y distribución de alimentos”. En: https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/informe_mayo_final.pdf

-CENTRO DE ESTUDIOS SCALABRINI ORTIZ (2016) “Informe económico mensual N° II: La Economía argentina”. En: https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/informe_coyuntura_febrero_v3.pdf

-CENTRO DE ESTUDIOS SCALABRINI ORTIZ (2017) “Informe de la Economía popular N°II: Economía Popular y Trabajo. Crecimiento de la Importación de Alimento en Argentina”. En: https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/informe_de_la_economia_popular_nro_ii_-_septiembre_2017.pdf

- CENTRO DE ESTUDIOS SCALABRINI ORTIZ (2017) "Informe de la Economía popular N°III: Distribución del valor / ingreso en la Producción de alimentos: ¿Cuánto para el productor y cuanto para los intermediarios?" En: https://www.ceso.com.ar/sites/www.ceso.com.ar/files/informe_economia_popular_y_trabajo_ndeg3_-_distribucion_del_valor_-_octubre_2017_-_completo.pdf
- DUMRAUF, S., PRIVIDERA, D. (2017) "Producción flori-hortícola en el periurbano platense: lo que el viento se llevó". Especial para sitio IADE-RE consultado en: <http://www.iade.org.ar/noticias/produccion-flori-horticola-en-el-periurbano-platense-lo-que-el-viento-se-llevo>
- GRAS, Carla y HERNÁNDEZ, Valeria (2009) "El fenómeno sojero en perspectiva: dimensiones productivas, sociales y simbólicas de la globalización agrorural en la argentina", en Carla Gras y Valeria Hernández (coords.) La Argentina rural: de la agricultura familiar a los agronegocios. Editorial Biblos, Buenos Aires, pp. 15-37
- HINDI, G (2014). Tesis de Licenciatura "Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y Economía Social". Facultad de Filosofía y Letras. UBA
- JAURETCHE, A (1957) "La enseñanza superior". En Los Profetas del Odio y la Yapa. Paña Lillo Editor, Buenos Aires, pp. 187-218.
- LARSEN, M. "Ya no es nosotros Universidad y Organizaciones, sino que creamos un espacio de encuentro" Entrevista publicada en la Revista *Redes de Extensión*, publicación de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, número 03, octubre 2017 (pp 55-64) <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/3819/3455>
- LARSEN, M. "La Experiencia del CIDAC en trabajo: desafíos y aportes conceptuales desde la antropología". En: Revista Quehaceres N° 1 Departamento de Antropología-Filo:UBA. <http://revistas.filo.uba.ar/index.php/quehaceres/article/view/451>
- OSLACK, O. y O'DONELL, G. (1976) Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Documento CEDES/CLACSO N°4.
- PETZ, I. (2010) Tesis Doctoral "Movimientos sociales y estatalidad. De la desocupación a la construcción política: El caso de la Unión de Trabajadores desocupados de Gral. Mosconi en el Noroeste de Salta, Argentina". Facultad de Filosofía y Letras. UBA.

- PETZ, I. y LARSEN, M. (2015) "Fortalecimiento de experiencias de economía popular en la zona sur de la CABA. Un abordaje desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA". En línea: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49948>
- MANZANAL, M. (Coord.) (2016) Perspectivas de la Agricultura familiar en la actual coyuntura económica. En: Revista Realidad Económica Nro. 303: Problemática Agraria Argentina. Los condenados de la Tierra, pp. 28-68. Ed. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Buenos Aires.
- NIREMBERG, O. (2006). "Programación y evaluación de proyectos sociales. Aportes para la racionalidad y la transparencia". Buenos Aires, Paidós.
- SOARES, R. (2000) "Gramsci, el Estado y el debate sobre la escuela". Editorial UNIJUI, Ijuí, Río Grande do Sul, Brasil
- TEUBAL, M. Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: Giarraca, N. (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? CLACSO. Buenos Aires. 2001
- TOMMASSINO, H. y RODRÍGUEZ, N. (2011). "Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales" en la Universidad de la República en "Cuadernos de Extensión: Integralidad: tensiones y perspectivas"- Universidad de la República- Montevideo.
- TRINCHERO, H y BALAZOTE, A (2007) "De la Economía Política a la Antropología Económica". Ed. Eudeba. Buenos Aires.
- TRINCHERO, H. y PETZ, I. (2014) "La cuestión de la Territorialización en las dinámicas de integración Universidad-Sociedad. Aportes para un debate sobre el "Academicismo". En Papeles de Trabajo N°27, Julio 2014. Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural
- TRINCHERO, H. y PETZ, I. (2013). «El academicismo interpelado. Sobre la experiencia de una modalidad de territorialización de la Universidad Pública y los desafíos que presenta.» Lischetti, M. (coordinadora). Universidades latinoamericanas. Compromiso, praxis e innovación. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2013. Arocena, R.

Fuentes

<http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina> El sector de pequeños productores hortícolas y florícolas esta en emergencia y moviliza dos

<http://ctepargentina.org/2105-2/>

<http://centrocepa.com.ar/>

<http://eppa.com.ar/dossier-produccion-horticola/>

Resolución 249-E/2017 Ministerio de Agroindustria y Manual Operativo Programa Cambio Rural en

<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/170449/20170911>

<http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg140755.pdf>

<http://www.infocampo.com.ar/debaten-la-reglamentacion-de-una-ley-de-reparacion-historica-en-agricultura-familiar/>

<http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/hundidos-comercio-global/>

<http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/fuerte-caida-del-consumo-la-produccion/>

<http://eppa.com.ar/informe-sobre-economias-regionales-documento-de-trabajo-n2/>

<http://eppa.com.ar/crisis-de-las-economias-regionales/>

<https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309181-2016-09-12.html>

<https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309625-2016-09-17.html>

<https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-309355-2016-09-14.html>

<http://www.telam.com.ar/notas/201609/162553-inversion-negocios-foro-argentina.html>

<https://www.pagina12.com.ar/66910-diagnostico-y-demandas-del-otro-campo>

<https://www.pagina12.com.ar/66909-feriado-para-denunciar-que-lo-barato-se-vende-car>

<http://www.iade.org.ar/noticias/el-presente-de-los-productores-hortícolas-del-cinturon-verde-platense>

<https://inta.gob.ar/noticias/grupos-de-abastecimiento-local-gal>

<https://inta.gob.ar/noticias/apoyo-a-los-grupos-de-abastecimiento-local-ministerio-de-desarrollo-social-de-la-nacion-inta>

<http://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/>

<https://www.pagina12.com.ar/108926-verdurazo-y-estado-ausente>

<https://www.infobae.com/campo/2018/04/16/nuevo-verdurazo-regalaran-30-mil-kilos-frente-al-congreso/>

<https://www.lanacion.com.ar/2126162-con-un-acampe-y-verdurazo-en-plaza-congreso-agricultores-familiares-pedirán-por-una-ley-de-acceso-a-la-tierra>

<http://www.telam.com.ar/notas/201408/75870-el-ministerio-de-agricultura-creo-el-consejo-de-agricultura-familiar-campesina-e-indigena.php>

<https://www.crea.org.ar/regiones-y-grupos-crea/>

<https://www.lanacion.com.ar/2135244-piden-reincorporar-a-los-despedidos-en-agricultura-familiar-y-en-el-senasa>

<https://www.lanacion.com.ar/2132904-de-misiones-a-chubut-cuatro-historias-de-los-despidos-en-agricultura-familiar>

<https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/agricultura-familiar-coordinacion-y-desarrollo-territorial/subsecretaria>

<https://tramites.magyp.gob.ar/php/imprimir.php?nro=53>

<https://www.lanueva.com/nota/2018-4-15-6-30-5--el-inta-perdio-mas-de-230-trabajadores-en-los-ultimos-siete-meses>

https://infocielo.com/nota/90848/mas_despidos_a_los_300_de_agroindustria_se_le_suman_otros_400_trabajadores_del_senasa_y_el_inta/

https://www.gba.gob.ar/radioprovincia/noticias/alerta_en_el_inta_ante_el_posible_despido_de_600_empleados

<http://www.iprofesional.com/notas/269055-tecnologia-infraestructura-redes-novedades-tecnologicas-experimental-agropecuaria-manfredi-Alerta-en-el-INTA-ante-el-inminente-despido-de-600-trabajadores>

<https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/170449/20170911>

<https://inta.gob.ar/documentos/cambio-rural-etapa-inicial>